ORDEN DEL DÍA
SESIÓN DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum inicial.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Correspondencia.
- 4.- Iniciativa que presenta el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 513 del Código de Familia para el Estado de Sonora.
- 5.- Iniciativa que presenta la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada, con proyecto de Ley que Regula la Operación de Albergues del Estado de Sonora.
- 6.- Iniciativa que presenta el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 43 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora.
- 7.- Iniciativa que presenta la diputada María Magdalena Uribe Peña, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora.
- 8.- Iniciativa que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora y la Ley de Hacienda del Estado.
- 9.- Iniciativa que presentan los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado de Sonora.
- 10.- Iniciativa que presenta el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo artículo 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de Sonora, resuelve presentar ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
- 11.- Dictamen que presentan las Comisiones de Desarrollo Urbano y Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, en forma unida, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

12.- Clausura de la sesión y citatorio para la próxima.

**CORRESPONDENCIA DE LA SESIÓN
DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019**

27 de septiembre de 2019. Folio 1570.

Escrito de la Gobernadora del Estado, asociada del Secretario de Gobierno, con el que presenta ante este Poder Legislativo, iniciativa con proyecto de Ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. **RECIBO Y SE TURNA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.**

27 de septiembre de 2019. Folio 1571.

Escrito del Director General de Enlace Legislativo y Municipal de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, mediante el cual remite a esta Soberanía, diverso escrito de la Secretaria del Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, a través del cual anexa copia del Acta certificada en la que consta que dicho órgano de gobierno municipal, aprobó la Ley número 179, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. **RECIBO Y SE ACUMULA AL EXPEDIENTE RESPECTIVO.**

27 de septiembre de 2019. Folio 1572

Escrito del Director General de Enlace Legislativo y Municipal de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, mediante el cual remite a esta Soberanía, diverso escrito de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Yécora, Sonora, a través del cual anexa copias de las Actas certificadas en las que constan que dicho órgano de gobierno municipal, aprobó las Leyes número 77 y 79, que modifican diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. **RECIBO Y SE ACUMULAN A LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.**

27 de septiembre de 2019. 1573 y 1574.

Escritos del Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, mediante los cuales remiten actas certificadas en las que constan que dicho órgano de gobierno municipal, aprobó las Leyes número 77 y 79, que modifican diversas disposiciones

de la Constitución Política del Estado de Sonora. **RECIBO Y SE ACUMULAN A LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.**

30 de septiembre de 2019. Folio 1576.

Escrito del Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite a este Poder Legislativo, Acuerdo mediante el cual se rechazan la formulación de un Proyecto centralista del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020, y hace un llamado para que se respete la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y El Pacto Federal, así mismo se exhorta a las 31 Legislaturas Locales, para que en atención al Acuerdo en mención, consideren emitir exhortos de carácter similar. **RECIBO Y SE REMITE A LAS COMISIONES PRIMERA Y SEGUNDA DE HACIENDA.**

30 de septiembre de 2019. Folio 1577.

Escrito del Subsecretario de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Pública, con el que da contestación al exhorto de este Poder Legislativo, dirigido a dicha dependencia del Estado, relativo a la problemática que se presenta en municipios del Sur del Estado, por el manejo de residuos peligrosos y residuos sólidos urbanos. **RECIBO Y SE ACUMULA AL EXPEDIENTE DEL ACUERDO 145, APROBADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019.**

HONORABLE ASAMBLEA:

El suscrito, Miguel Ángel Chaira Ortiz, diputado integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de ésta Sexagésima segunda Legislatura, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración, la siguiente **INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTICULO 513 DEL CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA**, para lo cual fundo la procedencia de la misma bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

*“Los **alimentos**, en derecho de familia, constituyen una de las principales consecuencias del parentesco y una de las fuentes más importantes de solidaridad humana. Los cónyuges y los concubinos están obligados a darse alimentos, de la misma manera que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, uno de los deberes esenciales de la responsabilidad parental o de la patria potestad, según los países. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas (paterna y materna), que estuvieran más próximos en grado. La obligación de dar alimentos es recíproca, de modo que el que los da tiene a su vez derecho a pedirlos cuando los necesite.”¹*

Son características de la obligación de darlos la proporcionalidad, la reciprocidad, toda vez que quien los da tiene a su vez derecho de recibirlos cuando así lo requieran las circunstancias; la imprescriptibilidad; el derecho a recibir los alimentos es irrenunciable y no está sujeto a transacción.

La obligación de dar alimentos surge de la necesidad de un sujeto con el que se tiene un vínculo familiar; sin embargo, es importante precisar que el contenido, regulación y alcances de dicha obligación variará dependiendo de las circunstancias

¹ https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos

particulares de cada caso concreto, pero particularmente del tipo de relación familiar en cuestión.

Están obligados a proporcionar los alimentos: los cónyuges y concubinos entre sí; los padres respecto de los hijos, a falta o por imposibilidad de ellos, la obligación recae en los ascendientes más próximos en ambas líneas; los hijos respecto de los padres, en caso de que las circunstancias así lo requieran, a falta o por imposibilidad de ellos, son deudores los descendientes más próximos en grado; a falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos faltando algunos de ellos a los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Esta obligación de hermanos y demás parientes colaterales está vigente en tanto el menor no alcance los 18 años o cuando se trate de incapaces. Como se puede observar la relación acreedor y deudor respecto de esta obligación es cambiante, coincidiendo con cada persona de la relación y dependiendo de las posibilidades y necesidades de cada una.

Según nuestra legislación local en materia de familia, específicamente, el artículo 513 del Código de Familia para el Estado de Sonora, señala en su concepto de los Alimentos, como parte de ese derecho u obligación legal, según corresponda, la asistencia en caso de enfermedad, para los casos de algún detrimento de salud de los hijos, cónyuges, concubinas, ascendientes o descendientes en general en los grados de parentesco que la misma ley determina, hace un señalamiento, para nuestro gusto muy superficial en cuanto a los alcances reales de ese derecho de asistencia en caso de enfermedad, por lo que sería muy importante establecer de manera clara, lo que el legislador quiere decir, es que el derecho de asistencia se refiere en todos los aspectos de atención médica, para todos aquellos que se encuentren en el supuesto de recibir el derecho de los alimentos que señala la norma; es decir, que además del derecho a la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento, también se contemple la asistencia médica en caso de enfermedad.

Asimismo, el mismo precepto legal antes señalado, menciona como parte del derecho de los alimentos respecto a los menores de edad, los gastos necesarios para su educación, hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias

personales; con lo anterior, entendemos que aquellos que tienen la obligación de proporcionar los alimentos, se deben preocupar también por proporcionar los elementos necesarios para que los niños y jóvenes menores de edad tengan oportunidad de adquirir una profesión u oficio para su eventual desarrollo como persona y como ciudadano en nuestra sociedad, pero también, sería muy importante reconocer que todo niño y joven en ese inter de desarrollo y preparación, deba tener también, momentos de esparcimiento, de atención y de cuidados específicos con el objetivo de hacer más transitable su camino hacia su desarrollo humano y social, es por ello que para un servidor, es muy importante establecer respecto de los menores, comprendan en la ley, además, de los gastos necesarios para su educación, el **cuidado respectivo y necesario** hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.

En ese orden de ideas, el mismo precepto legal, que hoy es materia de estudio, señala en su redacción, una relación de elementos que contemplan en forma general el concepto legal de los alimentos, y en el mismo, hace alusión a quienes va dirigido dicho derecho, es decir, se contempla a menores de edad, discapacitados o aquellos que son declarados como incapaces y los casos de prorroga y sus condiciones; con lo anterior, y en razón de lo que señala el Artículo 514 del Código de Familia en materia local, para lo cual se transcribe lo siguiente:

Artículo 514.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. los alimentos son obligatorios.

Esta disposición da cuenta del principio de reciprocidad que gozan los individuos a recibir comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia **médica** en caso de enfermedad, **cuidado y** educación, hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales, que los hayan proporcionado a sus hijos, esposas, concubinas, familiares, etc., sin importar su estado de salud física o mental.

Con lo anteriormente señalado, el legislador reconoce de forma justa y equitativa las acciones solidarias y responsables de aquellos que vieron y ven por cumplir su obligación de proporcionar alimentos a quienes están obligados a proporcionarlos, a tal

grado que para reforzar la norma, es importante especificar que además de todos aquellos derechos que conforman el concepto de los alimentos, también se debe considerar que todas aquellas **personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica, también se les proporcione todo lo necesario para su manutención y atención geriátrica.**

Por otro lado, la Ley de Adultos Mayores para el Estado de Sonora, señala en su artículo 7, lo siguiente:

ARTÍCULO 7.- De manera enunciativa, esta ley reconoce a los adultos mayores los siguientes derechos:

III.- A la salud y alimentación, que comprende:

a).- Tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales, para su atención integral;

...

No obstante que en el Código de Familia para el Estado de Sonora y la Ley de Adultos Mayores del estado de Sonora, contemplan como derecho de las personas adultos mayores el recibir los alimentos, estas no incluyen el derecho a su manutención y atención geriátrica, siendo que la salud de las personas a esas alturas

Es así, que la presente iniciativa tiene como finalidad establecer en el Código de Familia para el Estado de Sonora, mayor cobertura en la protección legal a aquellos que dan y reciben el derecho a los alimentos; es decir, garantizar que todos y todas aquellas personas que se encuentren en este supuesto reciban la atención médica adecuada y necesaria en caso de enfermedad se trate de niños, jóvenes, adultos, discapacitados o declarados incapaces, pero ahora más ahora, se incluyen también a todos los adultos mayores que se encuentren en una situación de incapacidad económica.

Por lo que se propone hacer las siguientes modificaciones y adiciones, al artículo 513 del Código de Familia para el Estado de Sonora, siendo las siguientes:

REDACCIÓN VIGENTE	NUEVA REDACCIÓN
<p>Artículo 513.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, comprenden, además, los gastos necesarios para su educación, hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Respecto de los discapacitados o declarados incapaces se prorrogará durante el tiempo que persista su discapacidad o hasta lograr su rehabilitación y pleno desarrollo y, comprenden, además, todos los gastos adicionales que se generen por la misma condición de los discapacitados o declarados incapaces. La obligación referida en este artículo se prorroga después de la mayoría de edad, si los acreedores alimentarios estudian una carrera técnica o superior, hasta el término normal necesario para concluir los estudios, si realizan los mismos de forma ininterrumpida.</p>	<p>Artículo 513.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia médica en caso de enfermedad. Respecto de los menores, comprenden, además, los gastos necesarios para su cuidado y educación, hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Respecto de los discapacitados o declarados incapaces se prorrogará durante el tiempo que persista su discapacidad o hasta lograr su rehabilitación y pleno desarrollo y, comprenden, además, todos los gastos adicionales que se generen por la misma condición de los discapacitados o declarados incapaces. La obligación referida en este artículo se prorroga después de la mayoría de edad, si los acreedores alimentarios estudian una carrera técnica o superior, hasta el término normal necesario para concluir los estudios, si realizan los mismos de forma ininterrumpida.</p> <p>Respecto de personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica, además de lo que señala el párrafo anterior, todo lo necesario para su manutención y atención geriátrica.</p>

En conclusión, con la presente iniciativa se pretende incluir entre los derechos de los alimentos de aquellos que lo reciben y de aquellos que tienen la obligación de darlos. Es decir, que en el cuerpo de la norma respectiva de la ley ya multicitada se incluya en su redacción la **asistencia médica**, el **cuidado respectivo y necesario para los hijos** hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales y, además, en la situación de aquellas **adultas mayores que carezcan de capacidad económica**, se les reconozca como parte de los alimentos, además, **todo lo necesario para su manutención y atención geriátrica.**

En consecuencia, con fundamento en los Artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 513 DEL CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo, ambos al artículo 513 del Código de Familia para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:

Artículo 513.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia **médica** en caso de enfermedad. Respecto de los menores, comprenden, además, los gastos necesarios para su **cuidado y** educación, hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Respecto de los discapacitados o declarados incapaces se prorrogará durante el tiempo que persista su discapacidad o hasta lograr su rehabilitación y pleno desarrollo y, comprenden, además, todos los gastos adicionales que se generen por la misma condición de los discapacitados o declarados incapaces. La obligación referida en este artículo se prorroga después de la mayoría de edad, si los acreedores alimentarios estudian una carrera técnica o superior, hasta el término normal necesario para concluir los estudios, si realizan los mismos de forma ininterrumpida.

Respecto de personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica, además de lo que señala el párrafo anterior, todo lo necesario para su manutención y atención geriátrica.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

A T E N T A M E N T E

Hermosillo, Sonora a 01 de octubre de 2019

C. DIP. MIGUEL ÁNGEL CHAIRA ORTÍZ

Hermosillo, Sonora, a 03 de octubre de 2019.

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita diputada Marcia Lorena Camarena Moncada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora, 32, fracción II y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente **INICIATIVA DE LEY QUE REGULA LA OPERACIÓN DE ALBERGUES DEL ESTADO DE SONORA**, fundando la procedencia de la misma en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sin lugar a duda, la labor que realizan los albergues situados en nuestro Estado es una labor muy loable y para nada sencilla. Quienes se dedican a ofrecer ayuda a las personas más desprotegidas merecen todo mi respeto y admiración, pero también es una labor que requiere de mucha atención y responsabilidad puesto que se está al cuidado de una persona.

En nuestro Estado existen diferentes tipos de albergues siempre enfocados a ayudar a los desprotegidos, tenemos desde albergues para ayudar a inmigrantes, personas de la tercera, y hasta indigentes.

Lamentablemente no contamos con un marco jurídico que regule el funcionamiento de ese tipo de establecimientos, no existen reglas claras para el establecimiento de albergues, para la contratación de personal acorde a los servicios que se prestan en los albergues y tampoco hay una delimitación de competencias entre autoridades que se encargue de supervisar el funcionamiento de los albergues.

En ese contexto, nace la necesidad de proponer una Ley que regule la operación y funcionamiento de los albergues públicos y privados, razón por la cual vengo a presentar ante este Recinto Legislativo, la presente iniciativa de Ley que Regula la Operación de los Albergues del Estado de Sonora, la cual se compone de 65 artículos distribuidos en los cuatro títulos que a continuación se describen:

- Título Primero, denominado *Disposiciones Generales*.
- Título Segundo, denominado *De los Derechos de los Residentes y obligaciones de sus Familiares*.
- Título Tercero, denominado *De los Albergues*.
- Título Cuarto, denominado *De la Verificación e Inspección y las Medidas de Seguridad*.

En el Título Primero, se establece en el Capítulo I, denominado *Disposiciones General*, que el objeto de la Ley consiste en regular, vigilar y supervisar la operación e inspección de albergues públicos y privados establecidos en el territorio del estado, dedicados al cuidado, vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia de personas.

Así mismo, se dispone que el titular del Ejecutivo del Estado, por conducto de sus dependencias y entidades, y los gobiernos municipales garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias: Que la prestación de servicios sea de calidad, igualdad, con calidez, seguridad y con la protección adecuada para el bienestar y la seguridad de los residentes; que los albergues cuenten con el personal capacitado y suficiente y que el personal de los albergues promueva el ejercicio pleno de los derechos de los residentes.

Por otra parte, se establece también, que no se consideran albergues para efectos de la ley: Los que de manera transitoria establezcan las instituciones públicas de conformidad a la legislación de en materia de protección civil y Las guarderías públicas o privadas o centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil estatales o municipales.

En el Capítulo II, denominado *De las Autoridades*, se establecen las atribuciones que tendrán las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, destacando que la Secretaría de Desarrollo Social, ejercerá entre otras, las siguientes atribuciones: Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia, el cumplimiento de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; implementar las acciones necesarias para los residentes reciban atención y servicios de asistencia social; integrar, actualizar permanentemente y publicar en su sitio oficial en internet el Registro Estatal de Albergues, y publicarlo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; Expedir y publicar en su sitio oficial en internet y publicarlo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; el reglamento de operación y las normas técnicas que rijan la expedición del Certificado de funcionamiento que para tal efecto propongan las autoridades a las que se refiere el artículo 8 de la presente ley.

En el caso del Instituto de Asistencia Social, órgano cuya naturaleza será la de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá entre sus atribuciones: Promover, coordinar, apoyar y supervisar la prestación de servicios asistenciales que ofrezcan los albergues; vigilar el cumplimiento de la presente Ley, sus disposiciones reglamentarias y demás normas oficiales aplicables; Dictar la política estatal para la operación de albergues, entre otras más.

Por su parte, la Secretaría de Salud, tendrá entre sus atribuciones: Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia, el cumplimiento de la presente Ley; expedir o negar la autorización sanitaria; el ejercicio del control sanitario en las instalaciones de los albergues.

En el Capítulo III, denominado *Del Registro Estatal de Albergues*, se establece todo albergue asentado en el territorio del estado deberá inscribirse en el Registro Estatal de Albergues, así mismo se prevé que el Registro Estatal de Albergues deberá contener por lo menos, los siguientes datos: Nombre o razón social del albergue; Domicilio del albergue; Censo de los residentes, que contenga género, edad y, en su caso, situación jurídica, y el seguimiento al proceso familiar y social y Relación del personal que labora en

el albergue, incluyendo al titular o administrador, así como su representante legal, especificando la figura jurídica bajo la cual operan.

El Capítulo IV, denominado *Del Certificado de Funcionamiento*, se prevé que el Certificado de funcionamiento será intransferible y tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de expedición, al término de la cual podrá ser renovado a petición expresa del titular o administrador del albergue.

Así mismo, se prevé que, para la obtención del Certificado de funcionamiento, se requerirá: Cumplir con los requisitos enunciados en el reglamento de operación y las normas técnicas que al efecto dicte la Secretaría de Desarrollo Social; La autorización sanitaria; Las licencias o permisos municipales que correspondan; Reunir los requisitos en materia de protección civil, entre otros requisitos más.

En el Título Segundo, en su capítulo I, denominado *De los Derechos de los Residentes*, se establecen los derechos que tendrán los residentes en albergues, entre los que se destacan los siguientes: Recibir la prestación de los servicios de manera eficiente y continua; Recibir un trato digno, respetuoso, sin discriminación y libre de violencia durante su estancia; Contar con intimidad personal, que incluye a sus pertenencias individuales; Participar de forma activa en la programación de actividades del albergue y en el desarrollo de las mismas; Recibir alimentación de acuerdo a su edad y condición de salud.

En Capítulo II, denominado *De los derechos de los Adultos Mayores*, se establecen como derechos de las personas adultas mayores entre otros, los siguientes: Ingresar o egresar definitivamente del albergue de manera libre y voluntaria, independientemente de la vigencia del contrato de prestación de servicios celebrados en los términos de esta Ley; Recibir de manera permanente y en términos comprensibles y accesibles, información completa y continua; A que el titular o administrador del albergue reciba sus quejas o reclamos, y que se substancien los mismos.

Por su parte, en el Capítulo III, denominado *De los Derechos de las Personas Menores de Edad*, se establecen como derechos de los residentes de albergues que

sean menores de edad, además de los señalados en las leyes General y Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil y los tratados internacionales en los que México sea parte en materia de derechos humanos, los siguientes: A ser reintegradas a su ambiente familiar; A desarrollarse en un medio adecuado y digno; A mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres, familiares e integrantes de su familia extendida, a las visitas y convivencia, entre otros más.

En el Capítulo IV, denominado *De las Obligaciones de los Familiares*, se establecen como obligaciones de los familiares y tutores de los residentes las siguientes: Cuidar el estado de salud y emocional del residente; Comunicar al personal del albergue toda la información necesaria para el debido cuidado y estadía del residente; Atender las indicaciones de tipo médico-preventivo que se efectúen por parte del personal autorizado; Acudir al albergue cuando le sea requerida su presencia; Informar al personal del albergue los cambios de números telefónicos, de domicilio o centro de trabajo, el nombre de la persona más cercana y responsable del residente, así como cualquier otro dato necesario para su cuidado, entre otros más.

En el Título Tercero, en su Capítulo I, denominado *De las Obligaciones de los Albergues*, Sección I, se establece que son obligaciones de los albergues los siguientes: Contar con la infraestructura inmobiliaria que para tal efecto determine la autoridad competente; Garantizar que la prestación de sus servicios estarán orientados a prestar sus servicios con calidad y calidez, en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; Brindar a los residentes el cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica; Proporcionar una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica certificación de la autoridad sanitaria; Prestar una atención integral y multidisciplinaria que brinde servicio médico integral, primeros auxilios, psicológico, social, jurídico, entre otros; y Fomentar la inclusión de los residentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable; Designar a la persona que fungirá como titular o administrador del albergue; Tramitar su Certificado de funcionamiento, entre otras más.

Por su parte en la Sección Segunda denominada *De los Albergues para Personas Menores de Edad*, se establecen como obligaciones de los albergues para personas menores de edad los siguientes: Velar por el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de la persona menor de edad, con base en el interés superior de la niñez; Garantizar a la personas menores de edad, las satisfacción de las necesidades fundamentales de su vida cotidiana que les permitan el adecuado desarrollo integral en los aspectos físico, emocional, intelectual, moral y social; Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, género, o condición física o mental de las personas menores de edad, de manera que permita un entorno afectivo y libre de violencia; Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que participen niñas, niños y adolescentes, entre otras más.

Finalmente, en la Sección Tercera, denominada *De los Albergues para Adultos Mayores*, se establecen como obligaciones de dichos Albergues los siguientes: Contribuir a que los residentes tengan una vejez digna, activa, mediante acciones que incluyan geriatría, gerontología, una nutrición adecuada y, en su caso, rehabilitación; Informar permanentemente al residente y, en su caso, a sus familiares, sobre su estado de salud y el tratamiento que requiera; Dar a conocer y entregar por escrito al residente sus familiares el reglamento de operación del albergue; Contar con asesoría jurídica en beneficio de la protección a los derechos de los adultos mayores, entre otras.

En el Capítulo II, denominado *Del Titular o Administrador del Albergue se establecen* que serán obligaciones de los mismos, las siguientes: Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecido en la presente ley y demás disposiciones aplicables para formar parte del Registro Estatal de Albergues; Asegurar que en las instalaciones del albergue, se fije en un lugar visible el Certificado de funcionamiento; Contar con un programa interno de protección civil; Brindar a las autoridades y servidores públicos las facilidades necesarias para puedan realizar visitas de inspección o verificación, permitiéndoles el acceso inmediato, y sin que medie previo aviso, a las instalaciones, expedientes y a los residentes, en cualquier día y hora sin que medie aviso previo, en términos

de las disposiciones aplicables; y en su caso, atender y dar puntual seguimiento a las recomendaciones o medidas de seguridad, entre otras más.

En el Capítulo III, denominado *Del Personal*, se establece que el personal que labore en los albergues deberá ser profesionales y debidamente calificados para atender a los residentes de acuerdo a sus condiciones y necesidades personales, así como al nivel de cuidado y servicios prestados. En el caso del personal que ejerza profesiones en el área de trabajo social y psicología o carreras afines, que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales, deberán cumplir con los requisitos siguientes: Contar con título en trabajo social, psicología o carreras afines, y con cédula para el ejercicio profesional; Contar con experiencia acreditable en temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, la familia, y el adulto mayor, según sea el caso; Contar con experiencia laboral acreditable mínima de dos años, en trabajo social, psicología, o en la atención de temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, la familia, y el adulto mayor, según sea el caso, entre otros requisitos más.

En el Capítulo IV, denominado *De la Prestación del Servicio*, establece que la prestación de los servicios previstos en la ley se regirá mediante la celebración de un contrato de prestación de servicios, salvo que medie orden de autoridad competente. Así mismo se establece que en el contrato de prestación de servicios se establecerá cuando menos lo siguiente: El grado de dependencia del residente; El tipo de servicios y cuidado requeridos por el residente; La forma y términos en que el residente podrá egresar transitoriamente del albergue, entre otros datos más.

Por su parte, el Capítulo V, denominado *De la Admisión de los Residentes*, se estipula que la admisión de una persona menor de edad en algún albergue será mediante derivación de la autoridad correspondiente, o en su caso, se atenderá lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Sonora. Para la admisión de un adulto mayor en algún albergue deberá mediar solicitud voluntaria, libre y expresa; o en su caso, del tutor declarado por autoridad judicial.

En el Título IV, en el Capítulo I, denominado de las Disposiciones Generales, se establece que lo no previsto en la Ley para efectos de los actos de verificación e inspección y las medidas de seguridad se aplicará supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

Por su parte, en el Capítulo II, denominado *De la Verificación e Inspección*, se establece que las visitas de verificación e inspección tendrán los siguientes objetivos: Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por esta Ley y demás ordenamientos aplicables por parte de los albergues; Informar a la autoridad competente de la detección oportuna de cualquier riesgo para la integridad física o psicológica, o que impida el ejercicio de los derechos tutelados por esta ley para los residentes; Iniciar el procedimiento para la cancelación o revocación del Certificado de funcionamiento y en su caso, imponer las medidas de seguridad y las sanciones que determine la Ley y demás disposiciones aplicables.

El Capítulo III, denominado de las *Medidas de Seguridad*, se establece que la autoridad que lleve a cabo la verificación o inspección, tendrá la facultad para imponer cualquier medida de seguridad que estime conveniente en los albergues cuando advierta situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los residentes, pudiéndose acompañar las medidas con un recomendación escrita en la que se fije un plazo de hasta treinta días para corregir la causa que le dio origen cuando no se considere grave; Apercibimiento escrito, el cual procederá en caso de que no se atienda la recomendación o medida de seguridad en el plazo establecido, señalándose un término de hasta cinco días para corregir la causa que lo motivó y Clausura total o parcial de actividades en el albergue que se mantendrá hasta en tanto se corrija la situación que le dio origen.

El Capítulo IV denominado, *De las Infracciones y Sanciones Administrativas*, se establece que, para la individualización de las sanciones, las autoridades tomarán en consideración lo siguiente: Los daños que se produzcan o puedan producirse; El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; El beneficio o lucro que implique para el infractor; La gravedad de la infracción; La reincidencia del infractor y La capacidad económica del infractor.

Por otra parte, se dispone también que las violaciones a los preceptos de la Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, por parte de los servidores públicos serán sancionados en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Finalmente, en el Capítulo V, denominado *De los Medios de Impugnación*, se establece que para la defensa jurídica contra actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora.

En cuanto a las disposiciones transitorias, se establece que la Ley entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Así mismo, se dispone que el titular del Poder Ejecutivo expedirá el Reglamento a la presente ley y efectuará las modificaciones regulatorias correspondientes dentro de un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la vigencia de esta Ley.

Por otra parte, los Ayuntamientos deberán expedir su regulación municipal dentro de los noventa días naturales contados a partir de la vigencia de esta Ley.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de:

LEY

QUE REGULA LA OPERACIÓN DE ALBERGUES DEL ESTADO DE SONORA

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I **DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1º. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular, vigilar y supervisar la operación e inspección de albergues públicos y privados establecidos en el territorio del estado, dedicados al cuidado, vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia de personas.

Artículo 2º. El Gobierno del Estado, por conducto de sus dependencias y entidades, y los gobiernos municipales garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo siguiente:

- I. Que la prestación de servicios sea de calidad, igualdad, con calidez, seguridad y con la protección adecuada para el bienestar y la seguridad de los residentes;
- II. Que los albergues cuenten con el personal capacitado y suficiente; y
- III. Que el personal de los albergues promueva el ejercicio pleno de los derechos de los residentes.

Artículo 3º. Se aplicará de manera supletoria lo dispuesto en el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora, la Ley de Salud para el Estado de Sonora y la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

En la interpretación y aplicación de la presente ley se considerará la mayor protección de los derechos conferidos por la legislación a los residentes.

Para los efectos de esta Ley todos los días y horas son hábiles y los plazos se cuentan en días naturales y de momento a momento.

Artículo 4º. Para efectos de la presente ley no se considerarán albergues:

- I. Los que de manera transitoria establezcan las instituciones públicas de conformidad a la legislación de en materia de protección civil; y
- II. Las guarderías públicas o privadas o centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil estatales o municipales.

Artículo 5º. Para efectos de esta ley se entiende por:

- I. Adulto mayor: Las personas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o de paso en el Estado.;

II. Albergue: El establecimiento público o privado, que presta servicios de cuidado, vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia de personas, independientemente de la unidad de tiempo con que se proporcione; se incluye en éstos los establecimientos con fines educativos y deportivos bajo la figura de seminternado e internado;

III. Autorización sanitaria: Acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria estatal permite a una persona física o jurídica, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos, con los requisitos y modalidades que determine la Ley de Salud para el Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables;

IV. Certificado de funcionamiento: Documento público que certifica que la prestación de servicios ofrecidos por los albergues cumple con los requisitos establecidos en la presente ley;

V. Licencia: Documento expedido por los gobiernos municipales para el funcionamiento del giro de albergue, posterior a la autorización sanitaria, cuando así corresponda;

VI. Personas en condición de vulnerabilidad: Las personas cuyas condiciones físicas, psíquicas, históricas, económicas, sociales o culturales, pudieran ser tomadas como motivos discriminatorios, y ello hace probable la existencia de ataques reiterados a su dignidad y sus derechos humanos, y se encuentren en una situación de mayor desventaja para el ejercicio pleno de sus derechos;

VII. Persona menor de edad: Toda persona menor de dieciocho años de edad;

VIII. Registro Estatal de Albergues: Al registro público de albergues asentados en el Estado.

IX. Residente: La persona que recibe el servicio de cuidado y vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia, por parte de los albergues regidos por la presente Ley; y

X. Titular o administrador del albergue: La persona que, en carácter de propietaria, administradora o cualquier otra denominación o figura jurídica, sea la responsable de la administración del albergue; todos los albergues deberán designar administrador.

CAPÍTULO II DE LAS AUTORIDADES

Artículo 6º. La Secretaría de Desarrollo Social tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia, el cumplimiento de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias;

II. Implementar las acciones necesarias para los residentes reciban atención y servicios de asistencia social;

III. Integrar, actualizar permanentemente y publicar en su sitio oficial en internet el Registro Estatal de Albergues, y publicarlo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora;

IV. Expedir y publicar en su sitio oficial en internet y publicarlo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; el reglamento de operación y las normas técnicas que rijan la expedición del Certificado de funcionamiento que para tal efecto propongan las autoridades a las que se refiere el artículo 8 de la presente ley;

V. Elaborar un reglamento de operación modelo para albergues, el cual deberá contener los elementos mínimos para su observancia en cada albergue; los albergues podrán adicionar elementos para su mejor operación interna, sin que las disposiciones puedan ser contrarias a lo previsto en esta Ley y su Reglamento, y en el mismo reglamento de operación modelo; y

VI. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

Artículo 7º. El Instituto de Asistencia Social, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover, coordinar, apoyar y supervisar la prestación de servicios asistenciales que ofrezcan los albergues;

II. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley, sus disposiciones reglamentarias y demás normas oficiales aplicables. En caso de que en la verificación o inspección se observen irregularidades, dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Social para que imponga al albergue la sanción que corresponda, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento;

III. Dictar la política estatal para la operación de albergues;

IV. Establecer los criterios de inspección y evaluación a los que se sujetarán los albergues;

V. Colaborar en la integración del Registro Estatal de Albergues.

VI. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

Artículo 8º. Corresponde a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, en sus respectivos ámbitos de competencia, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley, sus disposiciones reglamentarias y demás normas oficiales aplicables.

En caso de que en la verificación o inspección se observen irregularidades, dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Social para que imponga al albergue la sanción que corresponda, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento;

II. Expedir y, en su caso, revocar el Certificado de funcionamiento, según corresponda en los términos de esta Ley;

- III. Evaluar periódicamente la política estatal para la operación de albergues;
- IV. Elaborar investigaciones y estadísticas con motivo de la operación de albergues;
- V. Llevar a cabo visitas de verificación e inspección a todos los albergues para constatar que se cumpla con el reglamento de operación y demás normatividad aplicable;
- VI. Colaborar en la integración del Registro Estatal de Albergues;
- VII. Certificar la bitácora en las que los albergues deberán registrar ingresos y egresos, salidas temporales y cualquier eventualidad relativa a los residentes;
- VIII. Proponer e impulsar ante la Secretaría de Desarrollo Social, las disposiciones para que expida el reglamento de operación y las normas técnicas que rijan la expedición del Certificado de funcionamiento en sus respectivos ámbitos de competencia;
- IX. Tener acceso a los expedientes, entrevistar a los residentes para verificar su condición física e identidad, la condición y acceso al ejercicio de sus derechos humanos, impulsar el registro de nacimiento, en su caso; y promover la reinserción del residente y su reunificación familiar, cuando sea posible, escuchando en todo momento al residente y velando por su interés superior;
- X.- Proporcionar a los residentes los servicios de asistencia y orientación jurídica;
- XI. Proporcionar asistencia y orientación jurídica a los adultos mayores en casos relacionados con su abandono, patrimonio y testamento;
- XII. Atender oportunamente las solicitudes que los albergues efectúen para salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran a su cuidado;
- XII. Conocer de aquellos casos de residentes en que se presuma incapacidad y brindarles asistencia para salvaguardar sus derechos.
- XIV. Aplicar el procedimiento administrativo de sanción conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora; y
- XV. Las demás que le establezcan otras disposiciones de ley y regulatorias aplicables.

En caso de que en la verificación o inspección se observen irregularidades, la Procuraduría correspondiente dará aviso a la Secretaría de Desarrollo Social para que imponga al albergue la sanción que corresponda, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su reglamento, y ante cualquier otra autoridad para que proceda conforme el ámbito de su competencia.

Una vez que cualquier autoridad competente reciba comunicación sobre las condiciones de albergues o de sus residentes, las mismas deberán de abrir expediente e iniciar el procedimiento a que haya lugar.

Artículo 9º. Corresponde a la Secretaría de Salud:

- I. Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia, el cumplimiento de la presente Ley;
- II. Expedir o negar la autorización sanitaria;
- III. El ejercicio del control sanitario en las instalaciones de los albergues; y
- IV. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales, reglamentarias y normas oficiales aplicables.

Artículo 10. Corresponde a los municipios, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

- I. Expedir la reglamentación municipal de conformidad con lo establecido en la presente ley;
- II. Vigilar y supervisar el cumplimiento de la presente Ley;
- III. Coadyuvar en la integración y operación del Registro Estatal de Albergues;
- IV. Verificar en su ámbito de competencia que los albergues en la prestación de los servicios cumplan con los estándares mínimos de calidad y seguridad y las normas técnicas expedidos por autoridad competente;
- V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de control sanitario y protección civil que correspondan;
- VI. Expedir y revocar las licencias o permisos municipales de funcionamiento a los albergues;
- VII. Imponer sanciones; y
- VIII. Las demás que le establezca esta ley y otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

Artículo 11. Corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los términos de esta ley y su legislación aplicable, realizar visitas periódicas a los albergues, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias, así como el irrestricto respeto a los derechos humanos de los residentes.

Artículo 12. Las autoridades del Gobierno del Estado, por conducto de sus dependencias y entidades, y los gobiernos municipales, en el ámbito de su competencia, podrán suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la finalidad de coadyuvar con la aplicación y ejecución de la presente Ley.

CAPÍTULO III

DEL REGISTRO ESTATAL DE ALBERGUES

Artículo 13. Todo albergue asentado en el territorio del estado deberá inscribirse en el Registro Estatal de Albergues.

Las autoridades competentes para emitir las autorizaciones o, en su caso licencias, a las que se refiere esta Ley, se coordinarán para la debida inscripción en el Registro Estatal de Albergues.

La Procuraduría en materia de Protección de niñas, niños, adolescentes y la familia, deberá coordinarse con las autoridades del orden federal para efectos del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, conforme lo previsto en la legislación de la materia.

Artículo 14. El Registro Estatal de Albergues deberá contener por lo menos, los datos siguientes:

I. Nombre o razón social del albergue;

II. Domicilio del albergue;

III. Censo de los residentes, que contenga género, edad y, en su caso, situación jurídica, y el seguimiento al proceso familiar y social; y

IV. Relación del personal que labora en el albergue, incluyendo al titular o administrador, así como su representante legal, especificando la figura jurídica bajo la cual operan.

Artículo 15. La pérdida de la inscripción en el Registro Estatal de Albergues procederá en los siguientes casos:

I. Cuando habiendo transcurrido más de seis meses de revocado el Certificado de funcionamiento, persistan en el albergue las causas que dieron origen a la revocación;

II. Cuando a juicio de la autoridad existan causas graves que pongan en peligro la vida o la integridad física y psicológica de los residentes; y

III. Por la petición expresa del titular o administrador del albergue.

Artículo 16. La pérdida del registro producirá la revocación de las diversas autorizaciones y licencia de funcionamiento.

CAPÍTULO IV DEL CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 17. El Certificado de funcionamiento será intransferible y tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de expedición, al término de la cual podrá ser renovado a petición expresa del titular o administrador del albergue.

Artículo 18. Para la obtención del Certificado de funcionamiento, se requerirá:

I. Cumplir con los requisitos enunciados en el reglamento de operación y las normas técnicas que al efecto dicte la Secretaría de Desarrollo Social;

II. La autorización sanitaria;

III. Las licencias o permisos municipales que correspondan;

IV. Reunir los requisitos en materia de protección civil;

V. Contar con lo siguiente:

a) Con servicios indispensables para proporcionar comodidad, seguridad e higiene a los residentes durante su estancia;

b) Con espacios físicos propios para cada nivel de atención, así como espacios destinados al alojamiento, alimentación, aseo personal y, en su caso, atención médica;

c) Con un equipo multidisciplinario básico de personal apto y suficiente que preste a los residentes servicios médicos integrales, primeros auxilios, psicológico, social, jurídico, entre otros; y

d) Contar con instalaciones propias para el acceso universal de los residentes y sus familiares;

VI. Los demás requisitos que establezcan las leyes y disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 19. Corresponderá la cancelación del Certificado de funcionamiento de albergue cuando de la práctica de verificación o inspección se desprenda lo siguiente:

I. Se deje de cumplir con las condiciones mínimas requeridas para la obtención del Certificado de funcionamiento;

II. Se suspenda la prestación de servicios sin previo aviso a la autoridad competente en materia de protección de niñas, niños, adolescentes y la familia, o Defensa al Adulto Mayor, según corresponda, en un plazo mayor a treinta días naturales; o

III. Por cambio de domicilio del albergue.

En caso de que se presente cualquiera de los supuestos establecidos en el presente artículo, se apercibirá al titular o administrador del albergue y se le fijará un plazo según la naturaleza del acto, para que subsane las irregularidades detectadas.

Una vez transcurrido el plazo, la autoridad competente remitirá las constancias a la Secretaría de Desarrollo Social para que proceda conforme a derecho.

Artículo 20. La falta del certificado de funcionamiento dará lugar a la clausura definitiva del albergue.

Artículo 21. En caso de que el albergue no subsane las irregularidades detectadas en un plazo previsto en el artículo 19, dará lugar a la revocación del Certificado de funcionamiento.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DE LOS RESIDENTES Y OBLIGACIONES DE SUS FAMILIARES

CAPÍTULO I DE LOS DERECHOS DE LOS RESIDENTES

Artículo 22. Además de los derechos reconocidos por la legislación del estado, los residentes tienen derecho a:

- I. Recibir la prestación de los servicios de manera eficiente y continua;
- II. Recibir un trato digno, respetuoso, sin discriminación y libre de violencia durante su estancia;
- III. Contar con intimidad personal, que incluye a sus pertenencias individuales;
- IV. Participar de forma activa en la programación de actividades del albergue y en el desarrollo de las mismas;
- V. Recibir alimentación de acuerdo a su edad y condición de salud;
- VI. Reunirse y convivir con sus familiares y personas que autoricé, así como al régimen de visitas; y
- VII. Los demás que le establezca, la presente Ley, otros ordenamientos legales aplicables, y el reglamento de operación del albergue.

Artículo 23. Las autoridades y los albergues deberán garantizar que los residentes con discapacidad permanezcan en dichos albergues por el tiempo mínimo necesario bajo los principios de unidad y reunificación familiar; en caso de niñas y niños abandonados, serán preferentes las medidas de acogimiento familiar, atendiendo el interés superior de la niñez; y atenderán lo que al efecto prevé la legislación para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

En caso de albergues que tengan bajo su cuidado a personas migrantes mutiladas durante su tránsito por Sonora, deberán garantizar su adecuada recuperación y rehabilitación básica, en coordinación con las autoridades correspondientes.

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES

Artículo 24. Los adultos mayores además de los derechos señalados en la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora, tendrán los siguientes:

I. Ingresar o egresar definitivamente del albergue de manera libre y voluntaria, independientemente de la vigencia del contrato de prestación de servicios celebrados en los términos de esta Ley;

II. Recibir de manera permanente y en términos comprensibles y accesibles, información completa y continua;

III. A que el titular o administrador del albergue reciba sus quejas o reclamos, y que se substancien los mismos;

IV. Ser informado sobre las dependencias y entidades a las que podría acudir en caso de que se vea afectado en sus derechos;

V. Recibir una copia del reglamento de operación del albergue;

VI. A participar de manera libre e informada en las decisiones que afectan a su salud; y

VII. Los demás que le establezca la presente Ley y otros ordenamientos legales aplicables, y el reglamento de operación del albergue.

CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD

Artículo 25. Además de lo señalado en las leyes General y Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil y los tratados internacionales en los que México sea parte en materia de derechos humanos, las personas menores de edad residentes tienen derecho a:

I. A ser reintegradas a su ambiente familiar;

II. A desarrollarse en un medio adecuado y digno;

III. A mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres, familiares e integrantes de su familia extendida, a las visitas y convivencia;

IV. A salidas autorizadas, bajo estricta vigilancia y cuidado del responsable del albergue;

V. A recibir información clara, accesible, adecuada y apropiada para su edad, con relación al estado que guarda en el albergue;

VI. A participar de manera informada en las decisiones que afectan a su salud;

VII. A ser respetado en su integridad física, psicológica y moral;

VIII. A no ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, malos tratos o explotación;

IX. A recibir asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;

X. A tener acceso a información sobre la situación de los miembros de su familia si no mantiene contacto con ellos;

XI. A recibir atención especializada según su condición;

XII. A no ser trasladado a otro albergue, salvo que se justifique el extremo de la medida;

XIII. A disfrutar del descanso, recreación, juego, esparcimiento y actividades que favorezcan su desarrollo integral;

XIV. Los demás que le establezca la presente Ley y otros ordenamientos legales aplicables, y el reglamento de operación del albergue.

Artículo 26. Las niñas, los niños y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, tienen derecho a que su estancia en el albergue sea temporal y por el menor tiempo posible.

Para efectos de lo anterior, las autoridades correspondientes, en coordinación con los albergues, atendiendo el interés superior de la niñez, de conformidad con los principios de necesidad e idoneidad, de excepcionalidad y temporalidad; promoverán la reintegración de la persona menor de edad a la guarda y custodia de sus padres o ambiente familiar, una vez que se hayan resuelto o desaparecido las causas que originaron la separación.

Artículo 27. Cuando cualquier albergue reciba a cualquier persona sin que medie orden judicial ni contrato por escrito, se presume que quien lo recibe asume la obligación de prestarle cuidado y vigilancia temporal.

Artículo 28. De conformidad con el principio de unidad familiar se mantendrá juntos a los hermanos menores de edad. Sólo un Juez podrá decretar la separación de éstos cuando exista impedimento grave para su convivencia.

Artículo 29. Queda prohibido a los albergues mover o cambiar a cualquier residente o enviarlo a un sitio distinto al de su custodia y vigilancia; sólo podrá realizarse mediante autorización de la autoridad competente que justifique mediante acuerdo fundado y motivado el extremo de la medida, atendiendo el interés de las personas menores de edad, o los derechos de las personas adultas mayores y con discapacidad, y escuchando previamente al residente.

CAPÍTULO IV DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FAMILIARES

Artículo 30. Son obligaciones de los familiares y del tutor de los residentes, además de las establecidas por el Código Civil y la legislación aplicable, las siguientes:

- I. Cuidar el estado de salud y emocional del residente;
- II. Comunicar al personal del albergue toda la información necesaria para el debido cuidado y estadía del residente;
- III. Atender las indicaciones de tipo médico-preventivo que se efectúen por parte del personal autorizado;
- IV. Acudir al albergue cuando le sea requerida su presencia;
- V. Informar al personal del albergue los cambios de números telefónicos, de domicilio o centro de trabajo, el nombre de la persona más cercana y responsable del residente, así como cualquier otro dato necesario para su cuidado;
- VI. Ingresar al residente con sus artículos de uso personal en la cantidad y con las características que le señale el personal del albergue;
- VII. Visitar y convivir con el residente; con la frecuencia autorizada por el mismo residente, o sus legítimos representantes, y acordada con el albergue;
- VIII. Acudir y participar con regularidad en los convivios que por distintos motivos organice el albergue; y
- IX. Las demás que establezcan el reglamento de operación del albergue.

Artículo 31. El hecho de que los residentes reciban el cuidado y la atención que requieren por parte de terceras personas, de ninguna manera libera a los familiares de los derechos y de las obligaciones que la legislación en las distintas materias les impone.

TITULO TERCERO DE LOS ALBERGUES

CAPÍTULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALBERGUES

SECCIÓN PRIMERA. DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 32. Son obligaciones de los albergues, las siguientes:

- I. Contar con la infraestructura inmobiliaria que cumpla con lo siguiente:
 - a) Dimensiones físicas adecuadas al servicio que se proporciona;
 - b) Diseño y accesibilidad universal de los residentes y sus familiares; y

c) Medidas de salubridad e higiene, de seguridad y protección civil en términos de la legislación aplicable;

II. Garantizar que la prestación de sus servicios estará orientados a lo siguiente:

- a) Prestar sus servicios con calidad y calidez, en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;
- b) Brindar a los residentes el cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;
- c) Proporcionar una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica certificación de la autoridad sanitaria;
- d) Prestar una atención integral y multidisciplinaria que brinde servicio médico integral, primeros auxilios, psicológico, social, jurídico, entre otros; y
- e) Fomentar la inclusión de los residentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable;

III. Designar a la persona que fungirá como titular o administrador del albergue;

IV. Tramitar su Certificado de funcionamiento;

V. Garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas que se encuentran a su cuidado, vigilancia y, en su caso, guarda y custodia;

VI. Coadyuvar con las autoridades correspondientes para promover la integración social y familiar de los residentes;

VII. Brindar a los residentes un trato con respeto a su dignidad, intimidad personal y a sus derechos, garantizando en todo momento su integridad física, sexual y psicológica.

VIII. Desarrollar programas de educación y esparcimiento de acuerdo a las necesidades particulares de las residentes orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social, que favorezcan su desarrollo integral, así como la comprensión y el ejercicio de sus derechos;

IX. Brindar a los residentes, una atención física y psicológica adecuada;

X. Coadyuvar en la medida de sus posibilidades en la prestación de servicios de asistencia social a las personas en condición de vulnerabilidad;

XI. Informar a las autoridades correspondientes sobre la condición de vulnerabilidad de los residentes a su cuidado;

XII. Promover acciones orientadas a la preservación de las visitas y convivencia, mantener la integración familiar, y la participación e integración social de los residentes.

Para efectos de lo anterior, deberán promover actividades de convivencia con los residentes y familiares, las cuales no podrán ser impedidas o condicionadas salvo los casos previstos por las leyes correspondientes;

XIII. Realizar una evaluación médica de los residentes al momento de su ingreso; y llevar controles médicos periódicos de los residentes;

XIV. Elaborar y mantener actualizado el expediente de cada residente;

XV. Expedir su reglamento de operación en los términos previstos por esta Ley, y publicarlo en sitios visibles del albergue, tanto al interior como al exterior del mismo; deberá contener cuando menos, lo siguiente:

- a) Ajustarse al reglamento de operación modelo;
- b) La forma y términos en que habrán de prestarse los servicios a los residentes;
- c) Los horarios a que se sujetará la prestación de servicios;
- d) Las reglas necesarias para la sana convivencia; y
- e) Los demás requisitos que señale la legislación aplicable;

Se tendrán por no puestas las disposiciones que afecten los derechos humanos y sean contrarios a lo previsto en esta Ley y su Reglamento, y al reglamento de operación modelo;

XVI. Publicar en sitios visibles del albergue, tanto al interior como al exterior del mismo, el catálogo de derechos de los residentes, así como las cuotas o contraprestación por la prestación del servicio;

XVII. Denunciar a las autoridades competentes los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos y sean cometidos en contra de los residentes;

XVIII. Prestar sus servicios al número de residentes que les permita la capacidad de sus instalaciones;

XIX. No derivar en terceras personas, el cuidado, vigilancia, o en su caso, la guarda y custodia de los residentes;

XX. Llevar registro inmediato en la bitácora, todos los ingresos y egresos, salidas temporales, registro de visitantes, y cualquier eventualidad relativa a los residentes;

XXI. Designar al personal suficiente que garantice que siempre esté en el albergue para que las autoridades y servidores públicos puedan dirigirse para realizar visitas de inspección o verificación, permitiéndoles el acceso inmediato, y sin que medie previo aviso, a las instalaciones, expedientes y a los residentes; y

XXII. Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan.

Para efectos de lo establecido en el presente artículo, los titulares o administradores de los albergues y su personal, se abstendrán de realizar actividades que afecten la integridad física

y psicológica de los residentes. Asimismo, los titulares o administradores evitarán que el personal que realice actividades diversas al cuidado, vigilancia, y en su caso, la guarda y custodia de los residentes.

Artículo 33. Los albergues deberán elaborar y mantener actualizado un expediente por residente, en cual constarán todas las circunstancias personales del residente y que sean relativas a su estancia y los servicios que recibirá por parte del albergue.

El expediente al que se refiere el presente artículo deberá estar actualizado de manera permanente, y establecerá la modalidad de su ingreso o admisión, historial clínico y egresos, en los términos del Reglamento de la presente Ley.

En el caso de residentes menores de edad, el expediente deberá contener información suficiente que permita que su situación sea revisada y valorada de manera particular, así como determinar procedimientos de ingreso y egreso con el apoyo de las autoridades competentes que faciliten su reincorporación al ambiente familiar o social.

Artículo 34. Los albergues deberán llevar un padrón o base de datos de sus residentes, el cual deberá ser actualizado permanentemente, y contendrá como mínimo lo siguiente:

- I. Nombre, nacionalidad, datos de identificación, registro y estado de salud del residente;
- II. Fotografía del residente;
- III. Motivo y fecha de ingreso;
- IV. Nombre y domicilio de la persona que acompaña y, en su caso, representa al residente;
- V. Nombre y domicilio de las personas que ejerzan la guarda y custodia, tutela o, en su caso, la patria potestad; y
- VI. Los datos escolares del residente, en su caso; y
- VII. El estado de la situación jurídica del residente.

Los albergues deberán cumplir con las disposiciones legales en materia de datos personales.

El padrón a que se refiere el presente artículo será remitido de manera semestral a la Secretaría de Desarrollo social, y a las entidades previstas en esta legislación y su Reglamento, para lo cual podrá hacer uso de los medios electrónicos disponibles.

SECCIÓN SEGUNDA. DE LOS ALBERGUES PARA PERSONAS MENORES DE EDAD

Artículo 35 Son obligaciones de los albergues para personas menores de edad, también denominados centros de asistencia social, además de lo señalado en la sección primera del presente Capítulo, las siguientes:

- I. Velar por el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de la persona menor de edad, con base en el interés superior de la niñez;
- II. Garantizar a las personas menores de edad, la satisfacción de las necesidades fundamentales de su vida cotidiana que les permitan el adecuado desarrollo integral en los aspectos físico, emocional, intelectual, moral y social;
- III. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, género, o condición física o mental de las personas menores de edad, de manera que permita un entorno afectivo y libre de violencia;
- IV. Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que participen niñas, niños y adolescentes;
- V. Privilegiar en todo momento, el derecho de las personas menores de edad a vivir en familia;
- VI. Promover, preferentemente, el restablecimiento, integración y la preservación de los vínculos familiares de las personas menores de edad, tomando en cuenta que éstos no resulten en su perjuicio;
- VII. Asegurar el contacto personas menores de edad que se encuentran en los albergues con su familia y comunidad;
- VIII. No utilizar ningún tipo de métodos y/o reglamentos que impliquen o autoricen forma alguna de maltrato físico o psicológico, el aislamiento, tratos crueles, inhumanos, degradantes o estigmatizante, la restricción o denegación del contacto con familiares, o cualquier otra medida de ponga en peligro su integridad, salud física o mental; o de restricción de derechos que no haya sido ordenada por determinación judicial;
- IX. Alojar y agrupar de acuerdo a su edad y sexo a niñas, niños y adolescentes en las áreas de dormitorios, sin que por ningún motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que necesiten ser asistidos por algún adulto;
- X. Coordinarse con las autoridades correspondientes, a efecto de llevar a cabo acciones y programas efectivos para el cumplimiento de sus objetivos;
- XI. Colaborar con las autoridades señaladas en la presente Ley, y proporcionar todas las facilidades para el cumplimiento de sus atribuciones;
- XII. Llevar a cabo revisiones periódicas de la situación de sus residentes, de su familia y de la medida especial de protección por la cual ingresó al albergue;
- XIII. Contar con el reglamento de operación, en los términos de esta Ley, y aprobado por el Sistema Nacional DIF;

XIV. Dar a conocer al residente y entregarle por escrito el reglamento de operación del albergue;

XV. Brindar el cuidado y vigilancia a los residentes de manera permanente quedando prohibida la figura de albergue abierto;

XVI. Contar con el reglamento de operación, en los términos de esta Ley, y aprobado por el Sistema Nacional DIF;

XVII. Publicar en un lugar visible la constancia de registro de incorporación al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social;

Remitir semestralmente el padrón o base de datos de sus residentes con la información de la situación jurídica en la que se encuentren, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; y

XIX. Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan.

SECCIÓN TERCERA. DE LOS ALBERGUES PARA ADULTOS MAYORES

Artículo 36. Son obligaciones de los albergues para adultos mayores, además de lo señalado en la sección primera del presente Capítulo, las siguientes:

I. Contribuir a que los residentes tengan una vejez digna, activa, mediante acciones que incluyan geriatría, gerontología, una nutrición adecuada y, en su caso, rehabilitación;

II. Informar permanentemente al residente y, en su caso, a sus familiares, sobre su estado de salud y el tratamiento que requiera;

III. Dar a conocer y entregar por escrito al residente sus familiares el reglamento de operación del albergue;

IV. Contar con asesoría jurídica en beneficio de la protección a los derechos de los adultos mayores; y

V. Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan.

CAPÍTULO II DEL TITULAR O ADMINISTRADOR DEL ALBERGUE

Artículo 37. Son obligaciones del titular del albergue o administrador, las siguientes:

I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecido en la presente ley y demás disposiciones aplicables para formar parte del Registro Estatal de Albergues;

II. Asegurar que en las instalaciones del albergue, se fije en un lugar visible el Certificado de funcionamiento;

III. Contar con un programa interno de protección civil;

IV. Brindar a las autoridades y servidores públicos las facilidades necesarias para puedan realizar visitas de inspección o verificación, permitiéndoles el acceso inmediato, y sin que medie previo aviso, a las instalaciones, expedientes y a los residentes, en cualquier día y hora sin que medie aviso previo, en términos de las disposiciones aplicables; y en su caso, atender y dar puntual seguimiento a las recomendaciones o medidas de seguridad;

V. Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando el ingreso de residente menor de edad, corresponda a una situación distinta de la derivación por parte de una autoridad o tenga conocimiento de que pelagra su integridad física estando bajo su custodia, a fin de iniciar los procedimientos de protección especial de forma oportuna, identificar la mejor solución para el residente y, en su caso, evitar su permanencia en el albergue, dando su carácter de último recurso y excepcional;

VI. Realizar acciones específicas para fortalecer la profesionalización del personal del albergue; y

VII. Las demás obligaciones establecidas en la presente ley y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO III DEL PERSONAL

Artículo 38. El personal con que cuenten los albergues deberá ser profesional y debidamente calificado, según corresponda, para atender a los residentes de acuerdo a sus condiciones y necesidades personales, así como al nivel de cuidado y servicios prestados.

En el caso del personal que ejerza profesiones en el área de trabajo social y psicología o carreras afines, que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Contar con título en trabajo social, psicología o carreras afines, y con cédula para el ejercicio profesional;

II. Contar con experiencia acreditable en temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, la familia, y el adulto mayor, según sea el caso;

III. Contar con experiencia laboral acreditable mínima de dos años, en trabajo social, psicología, o en la atención de temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, la familia, y el adulto mayor, según sea el caso;

IV. No haber sido condenado por delitos dolosos; y

V. Presentar constancia por parte del albergue privado en la que indique que el personal profesional son personas empleadas asalariadas con remuneración mensual fija.

Artículo 39. Los albergues deberán contar con al menos, el siguiente personal:

I. El titular o administrador;

II. Especializado en proporcionar atención a actividades de estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud; atención médica y actividades de orientación social y de promoción de la cultura de protección civil; y

Los albergues para personas menores de edad, deberán contar con por lo menos, una persona para el cuidado y atención de cuatro niños o niñas menores de un año; y una persona para el cuidado y atención por cada ocho niños o niñas mayores de esa edad.

Artículo 40. El titular del albergue o administrador deberá designar y garantizar el personal suficiente para que las autoridades y servidores públicos puedan dirigirse para realizar visitas de inspección o verificación.

Artículo 41. El personal de los albergues deberá brindar sus servicios a toda persona, sin distinción alguna, con respeto, cuidado, prontitud, calidad y calidez humana.

Artículo 42. Es obligación del personal de los albergues guardar debida reserva y discreción sobre los asuntos y condiciones personales, estado físico y mental de los residentes.

Artículo 43. Los albergues podrán recibir la ayuda económica y afecto personal de ciertas y determinadas personas que, con fines altruistas, se hagan cargo de cada uno de los residentes en lo individual, pudiéndoles permitir convivir con ellos en épocas y circunstancias precisas, sin que esto implique el traslado de las niñas, niños y adolescentes fuera de las instituciones ni ejercer guarda y custodia personal ni cuidado y vigilancia sobre ellos. Los titulares o administradores del albergue supervisarán esa convivencia y reguardarán la integridad de los residentes sobre quienes la ejerzan.

Las personas que con fines altruistas a que se refiere el párrafo anterior, se acreditarán ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.

Artículo 44. Los albergues serán responsables directos por los actos y descuidos que cometan los empleados, voluntarios y prestadores de servicio social en perjuicio de los residentes.

Artículo 45. El personal que labore en los albergues estará obligado a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación, así como de protección civil que establezcan las autoridades competentes.

Artículo 46. El Reglamento de la presente Ley, establecerá el personal técnico mínimo con que deberá contar el albergue de acuerdo a su nivel de atención.

CAPÍTULO IV

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 47. La prestación de los servicios previstos en esta ley se regirá mediante la celebración de un contrato de prestación de servicios, salvo que medie orden de autoridad competente.

Artículo 48. En el contrato de prestación de servicios se establecerá cuando menos lo siguiente:

- I. El grado de dependencia del residente;
- II. El tipo de servicios y cuidado requeridos por el residente;
- III. La forma y términos en que el residente podrá egresar transitoriamente del albergue;
- IV. Tratándose de albergues privados, el costo que tendrá cada uno de los servicios pactados así como la contraprestación económica o cuota total en su conjunto;
- V. En su caso, la cuota de recuperación o la contraprestación que establezcan los albergues públicos;
- VI. La temporalidad en que regirá el contrato; y
- VII. Los derechos y obligaciones que los contratantes se otorguen de manera recíproca.

En ningún supuesto se podrá retener al residente, o condicionar o limitar su derecho a las visitas y convivencia, por la falta de pago de las cuotas u obligaciones alimentarias.

Los albergues públicos regirán la prestación del servicio mediante los criterios de ingreso y estancia para prestación de los servicios, en los términos de su reglamento de operación y disposiciones administrativas que les apliquen.

CAPÍTULO V DE LA ADMISIÓN DE LOS RESIDENTES

Artículo 49. La admisión de una persona menor de edad en algún albergue será mediante derivación de la autoridad correspondiente, o en su caso, se atenderá lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Sonora.

Artículo 50. Para la admisión de un adulto mayor en algún albergue deberá mediar solicitud voluntaria, libre y expresa; o en su caso, del tutor declarado por autoridad judicial.

TÍTULO CUARTO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 51. Lo previsto en el presente Título se regirá en lo conducente conforme a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

CAPÍTULO II DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN

Artículo 52. Las distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del estado y de los Gobiernos municipales dentro del ámbito de sus respectivas competencias deberán efectuar visitas ordinarias de verificación e inspección a los albergues cuando menos una vez al año. Del mismo modo efectuarán visitas extraordinarias cuantas veces resulte necesario.

Artículo 53. Las visitas de verificación e inspección a que se refiere el presente capítulo tendrán los siguientes objetivos:

- I. Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por esta Ley y demás ordenamientos aplicables por parte de los albergues;
- II. Informar a la autoridad competente de la detección oportuna de cualquier riesgo para la integridad física o psicológica, o que impida el ejercicio de los derechos tutelados por esta ley para los residentes;
- III. Iniciar el procedimiento para la cancelación o revocación del Certificado de funcionamiento; y
- IV. En su caso, imponer las medidas de seguridad y las sanciones que determine la Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 54. Cuando las visitas de verificación o de inspección arrojen irregularidades diversas a la competencia de la autoridad que inspecciona, deberá dar aviso a la dependencia o entidad de la administración pública estatal o municipal que corresponda.

Artículo 55. Cualquier persona podrá solicitar la intervención de la autoridad correspondiente para reportar cualquier irregularidad o incumplimiento a la normatividad o factor que pueda constituir un riesgo en los albergues.

CAPÍTULO III DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 56. La autoridad que lleve a cabo la verificación o inspección, tendrá la facultad para imponer cualquier medida de seguridad que estime conveniente en los albergues cuando advierta situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los residentes, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y sus Municipios.

Artículo 57. Las medidas de seguridad que imponga la autoridad, podrá acompañarse de:

I. Recomendación escrita en la que se fije un plazo de hasta treinta días para corregir la causa que le dio origen cuando no se considere grave;

II. Apercibimiento escrito, el cual procederá en caso de que no se atienda la recomendación o medida de seguridad en el plazo establecido, señalándose un término de hasta cinco días para corregir la causa que lo motivó; y

III. Clausura total o parcial de actividades en el albergue que se mantendrá hasta en tanto se corrija la situación que le dio origen. Cuando a juicio de la autoridad la causa sea grave o lo amerite, esta medida podrá imponerse con independencia de las demás señaladas en este artículo.

Artículo 58. Los plazos a que se refiere el artículo anterior, podrán ampliarse por un término igual, siempre y cuando ello se justifique a partir de la situación específica que originó la medida, exceptuando los casos de gravedad.

CAPÍTULO IV DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 59. Para la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por esta Ley y su Reglamento, las autoridades atenderán lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

Artículo 60. Para la individualización de las sanciones, las autoridades tomarán en consideración:

I. Los daños que se produzcan o puedan producirse;

II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

III. El beneficio o lucro que implique para el infractor;

IV. La gravedad de la infracción;

V. La reincidencia del infractor; y

VI. La capacidad económica del infractor.

Artículo 61. Será motivo de sanción económica, de conformidad con lo dispuesto en regulación aplicable, con multa de doscientas cincuenta veces a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometer la infracción, los siguientes actos realizados por cualquier albergue:

I. Impedir total o parcialmente el desarrollo de la visita por parte de los servidores públicos que realicen las visitas de verificación o inspección;

II. Preparar y ofrecer alimentos en mal estado, inadecuados para la dieta o de poco valor nutrimental para residentes;

III. Incumplir con las medidas de salud y atención médica en los términos que establezca la normatividad correspondiente;

IV. El incumplimiento a las obligaciones para los albergues o las que se establecen para el titular o administrador en esta Ley, su Reglamento o las normas técnicas expedidas por autoridad competente;

V. Incumplir con lo previsto en el reglamento de operación; o

VI. Poner en riesgo la vida, la integridad física o psicológica de cualquier residente.

Artículo 62. Son causas de clausura temporal las siguientes:

I. No contar con el personal competente o suficiente para brindar los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral del residente;

II. No regularizar la situación que dio origen a la imposición de la multa de tal forma que las causas que originaron la misma sigan vigentes;

III. El incumplimiento de estándares mínimos de calidad y seguridad establecidos por la autoridad competente;

IV. Generar cualquier circunstancia que signifique riesgo a la vida, la integridad física o psicológica de los residentes;

V. Reincidir en alguna de las causas que originen las sanciones contenidas en el artículo que antecede siempre que se cometa la misma infracción; o

VI. No contar con registro ante el Instituto de Asistencia Social en los casos de centros de acogida, casas hogares o albergues para personas menores de edad.

Artículo 63. Son causas de la revocación del Certificado de funcionamiento, así como la cancelación del Registro, las siguientes:

I. Reincidir en más de dos ocasiones en alguna de las causas que dieron origen a la clausura;

II. Poner en riesgo la vida o integridad física de algún adulto mayor o la pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves que sean atribuibles al incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley;

III. Cuando sea falsificada o alterada la documentación oficial;

IV. Cuando exista un mal manejo o manipulación, alteración o falsificación de los registros de estancia de los residentes por parte del titular o administrador del albergue;

V. Cuando sea comprobado, por parte de las autoridades competentes, que el titular o administrador del albergue, cometió actos de violencia, maltrato o abuso, pornografía u otras conductas que vayan en detrimento de la salud o integridad física y psicológica de los residentes;

VI. Cuando se registre el incremento en la capacidad del albergue, sin dar previo aviso a las autoridades competentes;

VII. Realizar cualquiera de las acciones que establece el artículo 30 de esta Ley; o

VIII. Cuando no cuente con un registro actualizado de los albergados, así como con la debida información de su situación jurídica y ésta sea del conocimiento de la autoridad competente.

Artículo 64. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, por parte de los servidores públicos serán sancionados en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

CAPÍTULO V DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 65. Para la defensa jurídica contra actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora.

No procederá la suspensión del acto tratándose de medidas de seguridad, clausura o revocación del Certificado de funcionamiento o licencia, independientemente del recurso administrativo o juicio de nulidad que se interponga en contra del mismo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo expedirá el Reglamento a la presente ley y efectuará las modificaciones regulatorias correspondientes dentro de un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la vigencia de esta Ley.

TERCERO. Los Ayuntamientos deberán expedir su regulación municipal dentro de los noventa días naturales contados a partir de la vigencia de esta Ley.

CUARTO. Los albergues deberán obtener el Certificado de funcionamiento previsto por esta ley dentro de un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la vigencia de esta Ley.

QUITNO. La Secretaría de Hacienda deberá de asignar una partida presupuestal a la Secretaría de Desarrollo Social, para el ejercicio de las facultades que le corresponderán al Instituto de Asistencia Social.

ATENTAMENTE

DIP. MARCIA LORENA CAMARENA MONCADA

HONORABLE ASAMBLEA:

El suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política de Sonora, y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta Soberanía, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA**, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La seguridad es un derecho fundamental porque supone la preservación de las dimensiones físicas, psíquicas y morales de las personas; un bien jurídico cuya protección tiene como objetivo el desarrollo integral y que, por tanto, se relaciona con el derecho a la dignidad y a la integridad, de ahí que constituya un factor ineludible para el goce y el disfrute del resto de los derechos.

La protección y la tutela de este derecho ocupan una relevancia destacada cuando se refiere a un grupo en situación de vulnerabilidad, tal y como ocurre en el caso de niños y adolescentes.

Los constantes casos de riesgo y de violencia, se han convertido en un fenómeno social que preocupa a toda la sociedad, y que, desafortunadamente, cada día van en aumento.

La Organización de las Naciones Unidas, de la mano de expertos en la materia, ha realizado diversos foros sobre criminología².

La Criminología, pretende estudiar las causas de la criminalidad, su prevención y tratamiento.

De los resolutivos que han emitido, podemos señalar que las Naciones Unidas reconoce como factores criminógenos y preventivos a: la familia, la educación, la

² <https://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa>

comunidad, los medios de comunicación, entre otros factores que inciden definitivamente en el desvío o la adaptación de los antisociales y criminales.

Por ello, señalan que para que se puedan implementar estrategias realmente efectivas que conduzcan a la prevención de los delitos, lo primero que se tiene que hacer es conocer sobre la problemática de la delincuencia, sus efectos, causas, etc.

Existen diversos instrumentos internacionales que sirven de sustento en sus resoluciones, como lo son:

- La Convención sobre los Derechos del Niño (resolución 44/25 de la Asamblea General);
- La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (resolución 48/104 de la Asamblea General);
- Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) (resolución 45/112 de la Asamblea General);
- La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (resolución 40/34 de la Asamblea General);
- Las directrices para la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de la prevención del delito urbano (resolución 1995/9);
- La Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI (resolución 55/59 de la Asamblea General); y
- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (resolución 55/25 de la Asamblea General, y resolución 55/255 de la Asamblea General).

En ese sentido, hablar de prevención del delito, es abarcar estrategias y acciones tendentes a reducir los riesgos de que se generen delitos y por ende se causen afectaciones a la sociedad.

Retomando una de las recomendaciones que emite la ONU, debemos de enfocarnos en propiciar que, en los planes y programas de estudios de nuestra juventud, se atiendan cuestiones tan básicas como las materias de prevención del delito, el bienestar social, las consecuencias del uso de las diversas drogas u otras sustancias prohibidas, con la finalidad de que dichas materias, resulten benéficas en la formación de una nueva generación mucho más preparada y consiente.

Como sabemos, el tema de la inseguridad se ha vuelto una de las principales preocupaciones en nuestro país y claro en nuestro estado.

Por ello, si logramos la participación de todos los jóvenes en la implementación de estos programas, podremos obtener resultados benéficos para toda la sociedad.

En el mundo, hay ejemplos muy claros de como la implementación de este tipo de programas han dado resultados y ello, ha propiciado que exista una mayor seguridad en la comunidad, contribuyendo por ende a un mejor desarrollo sostenible de sus países.

Las políticas responsables y eficaces de prevención del delito, mejoran la calidad de la vida de todos los ciudadanos.

Producen beneficios a largo plazo al reducir los costos relacionados con el sistema formal de justicia penal, así como otros costos sociales resultantes de la delincuencia.

Por ello, debemos de apostarle a nuestra juventud, promoviendo el bienestar de las personas y fomentando un comportamiento favorable hacia la sociedad.

No podemos dejar de mencionar que, en diversos municipios de nuestra entidad, existen programas igualmente exitosos que han ayudado a nuestra juventud a alejarse de las drogas siendo uno de ellos D.A.R.E³.

El programa “Educación Para Resisitir al Abuso de las Drogas”, o mejor conocido como D.A.R.E, por sus siglas en inglés, es uno de los esquemas contra las drogas que más éxito tiene a nivel internacional.

Su finalidad es prevenir el uso de las drogas, así como fomentar una vida sin violencia mediante la identificación de presiones sociales y el modelo de toma de

³ <https://www.daremexico.org/index.php?m=1&op=1>

decisiones. El programa trabaja mediante dinámicas vivenciales y pretende enseñar a los estudiantes habilidades que les ayuden a evitar comportamientos de alto riesgo.

D.A.R.E. fue fundado en 1983 en la ciudad de Los Ángeles, California y es tan exitoso que actualmente opera en cerca del 80% de las escuelas en Estados Unidos y en más de 54 países alrededor del mundo.

En México, el programa se inició en Tijuana en 1990 y actualmente se extiende a 84 ciudades de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Baja California, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos, Sonora y Oaxaca.

En ese sentido, resulta indispensable que se constituyan, a través de la implementación de planes o programas escolares, una cultura de la prevención de los delitos en las escuelas, que nos permita desarrollarnos en un ambiente armónico y seguro que permita el bienestar y desarrollo pleno.

La escuela es sin duda un espacio donde la mayoría de los seres humanos pasan largas horas de su vida, pues en ella, no sólo se aprenden lecciones, sino también experiencias de vida, logros y contrariedades.

En este sentido, la escuela es un lugar estratégico para prevenir las causas que generan violencia y delincuencia, así como el lugar donde se inicia la socialización y formación de una cultura cívica, por ello se convierte en el espacio privilegiado.

En este contexto, la presente iniciativa busca fortalecer la legislación en Sonora en cuanto al compromiso que tiene nuestro estado de formar y educar para prevenir la violencia en la familia y en la sociedad, aspectos que se entrelazan y se transfieren de un ámbito a otro sin que sean excluyentes o ajenos a las tareas de prevención social del delito.

Por ello, desde la escuela y claro que también desde la familia, se debe articular e implementar una estrategia que promueva, desde ambos espacios, la adopción de actitudes y acciones que favorezcan la construcción de una comunidad segura.

Poner en práctica estrategias de prevención social del delito es algo más que reducir la violencia y abatir la comisión de hechos delictivos; implica atender las causas generadoras del delito.

La formación sólida de una cultura que impulse el desarrollo del capital social en un contexto humanístico, permite motivar la participación corresponsable de la ciudadanía para reforzar la cohesión comunitaria, sustentada en valores de cooperación, solidaridad, protección y respeto.

En consecuencia, con fundamento en los Artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose sucesivamente los demás, al artículo 43 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 43.- ...

...

En el mismo sentido, la Secretaría impulsará que en nuestra Entidad se incluya en los planes o programas de estudios, y/o se aplique mediante la implementación de programas, la cultura de la prevención del delito, con la finalidad de permitir que la sociedad se desarrolle en un ambiente armónico y seguro, que permita el bienestar y desarrollo pleno.

...

...

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ATENTAMENTE

Hermosillo, Sonora a 03 de octubre de 2019.

DIPUTADO LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARÁZ.

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita **Diputada MA MAGDALENA URIBE PEÑA**, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en pleno uso de nuestro derecho de iniciativa, previsto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco respetuosamente ante esta asamblea, con el objeto de someter a su consideración, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA, con el objeto de facilitar el acceso de grupos vulnerables de la sociedad, a los programas de desarrollo social, para lo cual fundo la procedencia de la misma bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como legisladora, es para mí fundamental poder generar las condiciones para que toda la población tenga las mismas oportunidades, por ello me preocupa la situación de los grupos vulnerables de la sociedad.

En muchos de los programas enfocados en general a grupos vulnerables, realmente no se les considera esta situación vulnerable en lo específico, con respecto a las demás personas.

Dicha situación, vulneran sus derechos humanos, los cuales son la parte fundamental de la vida colectiva como sociedad.

Los grupos vulnerables, por sus condiciones socioculturales, de salud, origen étnico, género, discapacidad y otros, viven una realidad de mayor impedimento.⁴

Las clasificaciones de grupos vulnerables, entre otras, son los siguientes:

⁴ Véase: Los Derechos Humanos, los Grupos Vulnerables y el ISSSTE. Disponible en: <https://www.gob.mx/issste/articulos/los-derechos-humanos-los-grupos-vulnerables-y-el-issste?idiom=es>

- Personas con discapacidad.
- Mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia.
- Adolescentes embarazadas.
- Personas adultos mayores

A manera de ejemplo, para explicar el fundamento de mi Iniciativa, voy a destacar el tema de las personas adultos mayores, que en lo que corresponde a nuestra entidad federativa.

En efecto, en materia de cobertura a los programas destinados a las personas adultos mayores, es imperante facilitar el acceso a nuestros Adultos Mayores, para alcanzar la meta de cobertura estimada por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora.

Aquí tenemos una situación de oportunidad, para mejorar esta cobertura:

Las reglas de operación de los programas de desarrollo social, implican requisitos como acudir a las oficinas, presentar documentación que ya se ha presentado, volver a llenar formularios, incluso por vía internet, entre muchos más requisitos.

Con estos requisitos, aparentemente sencillos para cualquier persona, para cada grupo vulnerable de la sociedad si es una complicación reunirlos fácilmente.

A muchas personas adultos mayores, precisamente por su edad no pueden movilizarse mucho, están solos, no pueden llenar fácilmente los formularios por escrito, iguales complicaciones tienen con requisitos por la vía de las tecnologías.

No omito aclarar, que, en la práctica, los servidores públicos responsables y competentes, son sensibles a que estos requisitos muchas veces les complican el acceso a personas vulnerables y otorgan cierta flexibilidad.

Por lo anterior, encuentro preocupante la situación en la que estamos sumergidos como ciudadanos y como sociedad, y está en nuestras manos tratar de erradicar dichas carencias sociales y apoyar a los grupos vulnerables.

Apegándonos al principio de la competencia, no está en nuestras manos la operación de los programas; sin embargo, tenemos herramientas legislativas, las cuales hay que explotar en aras de generar mejoras en nuestra sociedad, con la finalidad fortalecer a los grupos vulnerables.

Es para mí de especial atención generar las condiciones para que las personas vulnerables o grupos vulnerables, con base a modificaciones a la normatividad, pueden tener acceso fácil, sencillo, y que las instituciones garanticen dicho acceso por medio de la ley, atendiendo a la calidad del beneficiario como parte de un grupo vulnerable de la sociedad.

Efectivamente, que por Ley, el Gobierno tenga la obligación de establecer en las reglas de operación de los programas, esa flexibilidad de brindar fácil acceso a personas con calidades específicas vulnerables.

Es fundamental establecer normas que permitan a los grupos en comento, poder hacer a un lado el obstáculo de requisitos que impiden su acceso, formalidades que les complican su inclusión, producto de su condición de vulnerabilidad.

En efecto, las reglas de operación de los programas sociales, no son sensibles a las condiciones del grupo vulnerable beneficiario del mismo; es decir, no toman en consideración la situación específica de las personas vulnerables a las que va dirigido.

En aras de generar más claridad en la propuesta que hoy traigo ante ustedes, reitero lo que propongo:

Reglas de operación que garanticen el fácil acceso a los grupos vulnerables de la sociedad a los programas correspondientes, con la convicción de que será suficiente para asegurar un acceso más amplio a los diversos programas sociales de cualquier orden de gobierno, atendiendo a la calidad vulnerable de cada beneficiario.

Por lo expuesto con antelación y en apego a lo que señalan los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 38.- ...

Las reglas de operación mencionadas en el párrafo anterior, deben ser sensibles a las condiciones de los grupos vulnerables de la sociedad, por lo que deben de priorizar y garantizar el fácil acceso de los mismos a los programas correspondientes, atendiendo a la calidad vulnerable del beneficiario.

TRANSITORIO

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La Secretaría de Desarrollo Social tiene un periodo de 60 días para homologar su reglamento acorde a las disposiciones del presente decreto.

Hermosillo, Sonora a 03 de septiembre del 2019.

ATENTAMENTE

**DIPUTADA MA MAGDALENA URIBE PEÑA.
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.**

Hermosillo, Sonora; a 03 de octubre de 2019

**H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
P R E S E N T E.-**

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de nuestro derecho de iniciativa consagrado en el artículo 53, fracción III, de la Constitución Política Local, y el artículo 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparecemos ante esta Soberanía con el propósito de someter a Su consideración la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE BIENES Y CONCESIONES Y LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA**, al tenor de las siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado mes de mayo, se hizo del conocimiento público que el Gobierno del Estado de Sonora, inició el proceso de venta de los estadios Héctor Espino de Hermosillo y Tomás Oroz Gaytán de Ciudad Obregón, teniendo como potencial comprador al Gobierno Federal.

Según la información referida, la posible transacción de compra-venta de estos inmuebles, que suman más de 16 hectáreas, alcanzaría un monto de 1, 000,057 millones 328 mil pesos, suficiente para construir escuelas de deporte, dentro del proyecto de impulso a favor del béisbol.

Además, el 9 de agosto de 2019, también se hizo de conocimiento público, por parte de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones que lanzaría partir del 12 de agosto la primera etapa de licitación pública para la venta respecto a los primeros 16 inmuebles de un total de 65 que se pretenden vender para subsanar el adeudo del Isssteson.

Carmen Carballo Cabanillas, coordinadora ejecutiva de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones indicó que este proceso sería de gran beneficio para los sonorenses, porque los recursos que de aquí se obtengan, se destinarían directamente al sector salud, uno de los renglones prioritarios de este gobierno.

Por su parte, la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, dijo que se buscaron los bienes para resolver los males y aseguro que el Gobierno sonorense se comprometía a reforzar los programas de Seguridad y Salud, así como el pago de adeudo de pensiones del Isssteson con el recurso que se obtendrá por la compra-venta de estos inmuebles.

Para tener idea de la magnitud de lo anterior, la suma total del recurso que se obtendrá tanto por la compra-venta de los estadios y de la licitación de los primeros 16 predios por parte de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, equivale casi al presupuesto asignado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora de 1,472 millones de pesos; es superior al presupuesto asignado al poder judicial de 1,228 millones de pesos y representa el 57% de los 2,422 millones asignados a la Secretaría de Seguridad Pública.

Como se observa, el monto recaudado por la compra-venta de estos inmuebles, patrimonio de todos los sonorenses, alcanza una suma importante, esto sin contar el monto total del resto de los inmuebles que se van a licitar, por lo que debemos de estar seguros en el destino del recurso y evitar que sea mal gastado, pues como ya se ha señalado, el ejecutivo gasta más y diferente de lo que le aprueba este H. Congreso.

Como lo señala México Evalúa, en su micro sitio La Caja Negra⁵, haciendo referencia al presupuesto federal, pero que en Sonora lamentablemente sucede lo mismo, *“año con año, el Congreso aprueba un presupuesto distinto al que termina por ejercerse. Esta práctica sistemática genera que el presupuesto aprobado no refleje ni permita saber con claridad en qué se van a gastar los recursos públicos, nuestros recursos. De tal manera, que el presupuesto es como una caja negra que poco a poco va revelando su contenido conforme se va ejerciendo en el año fiscal. La mayor transparencia se logra una*

⁵<https://www.mexicoevalua.org/cajanegra/>

vez que se ha ejercido completamente y que las decisiones en materia de gasto han sido tomadas.”

Es importante precisar, que en la presente administración el gasto corriente se ha incrementado de manera considerable y por el contrario el gasto de capital, es decir la obra pública e infraestructura ha disminuido. De acuerdo a la información de las Cuentas Públicas de 2010-2015 el gasto corriente represento el 69.17% del gasto total y el gasto de capital el 13.49%, mientras que los ejercicios de 2016-2018, el gasto corriente representó el 75.51% del gasto total y el gasto de capital tan solo el 3.81%.

Atentos a estas conductas por parte del ejecutivo, nos resultó importante solicitarle al Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, lo siguiente:

- Nos haga llegar una copia de la Carpeta ejecutiva que entregó la Gobernadora al Comisionado de Béisbol, además que se nos informara cual sería el mecanismo de pago por parte del Gobierno Federal, fechas proyectadas para los mismos, así como si existe un proyecto del destino de los recursos obtenidos de la compra-venta y si la ejecución de dicho recursos se tiene contemplado como una ampliación del presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 o se plantea sea integrado al proyecto de presupuesto de egresos 2020.

El oficio solicitándole la información mencionada se le envió al Secretario de Hacienda, el día 21 de mayo del presente año, y del cual, al día de hoy no hemos recibido respuesta.

Esto nos debe de preocupar, porque en el informe individual de la Auditoría al tercer trimestre de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2018, realizada por el Instituto de Auditoría Fiscalización de Sonora, auditoría financiera No. 2018AE0102010048, se revisaron las incorporaciones y desincorporaciones de bienes muebles e inmuebles, pero este Congreso no tiene la información de la localización de los bienes inmuebles, si dichas desincorporaciones fueron donados, enajenados o transmisiones de dominio, tampoco tenemos conocimiento sobre los recursos que se obtuvieron enajenación de los mismos.

Conjuntamente, es alarmante que hasta el día de hoy este Congreso, no ha recibido información alguna al respecto, pues en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del año 2019, enviada por la titular del Ejecutivo del Estado, solo se incluyó en el rubro de aprovechamientos patrimoniales un monto total de \$ 6,360,500, por concepto de Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público, por lo que es evidente que los ingresos de la compra-venta de estos inmuebles en mención, no fueron incluidos en la Ley de Ingresos y se desconoce a detalle su destino.

Debemos de recordar, que en Julio 2017, Ulises Reyes, entonces director de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, anunció que fue vendido el Edificio de Banca Cremi por 26 millones de pesos, pero se desconoce el destino que se le dio a los recursos.

Por lo anterior, el objeto de esta iniciativa, va en el sentido de transparentar y etiquetar el destino de los recursos que el Estado obtenga por enajenación de Bienes inmuebles y por otro lado que la desincorporación de los bienes inmuebles del Estado se efectúe con la aprobación de este Congreso, por lo que proponemos lo siguiente:

1. En la Ley de Bienes y Concesiones, se establece la obligación de que la enajenación de bienes inmuebles y la desincorporación de los bienes del dominio público deberán ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso, el Ejecutivo deberá de incluir en los informes trimestrales los movimientos efectuados en el inventario de bienes inmuebles durante en el período que se informa.
2. En la Ley de Bienes y Concesiones, se establece la obligación que el destino del recurso que se obtenga por la enajenación de bienes inmuebles deberán ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso.

3. En la Ley de Hacienda, se establezca que los recursos que se obtengan por la enajenación de bienes inmuebles, se le destine el 30% al municipio donde se encuentren los bienes enajenados.

Con esta propuesta, estaremos atentos, vigilando en todo momento el correcto destino y aplicación de los recursos proveniente del patrimonio de todos los Sonorenses.

Para concluir, en días pasados exigimos que el Ejecutivo del Estado, instruyera al Secretario de Hacienda para que en el Proyecto del paquete presupuestal del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2020, incluyera el fondo o recurso económico que provenga de la operación de la compra-venta entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, de los estadios de béisbol Tomás Oroz Gaytán y Héctor Espino, inmuebles ubicados en la Ciudad de Obregón y Hermosillo, Sonora, proveniente de la Federación, así como el recurso económico que provenga de los 65 inmuebles que pretende vender el Gobierno del Estado, ubicados en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Empalme, Guaymas, Nogales, San Luis Rio Colorado, entre otros, para que se destine primeramente a saldar la deuda del Gobierno del Estado con el Fondo de Pensiones de los trabajadores del ISSSTESON.

Por todo lo antes expuesto, tenemos a bien someter a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO DE SONORA Y LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 6, fracción III, IX, XI y XII, 14 fracción II y III, 16 fracción IV y V, 43 primer párrafo, 45 y 48; y se adicionan la fracciones XIII del artículo 6, 6 BIS, 16 fracción VI, 48 BIS y 93 BIS de la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 6.-...

III. **Realizar** actos de adquisición, posesión, conservación y administración de los bienes inmuebles del Estado, en los términos de esta Ley o de otras disposiciones legales aplicables;

...

IX. Mantener al corriente el inventario y el avalúo de los bienes del dominio del Estado y determinar las normas y procedimientos para realizarlos. **El inventario deberá enviarse al Congreso del Estado en la Cuenta Pública y la relación de movimientos efectuados en el inventario durante el período, deberá anexarse a los informes trimestrales correspondientes;**

...

XI. Ejercer la facultad o derecho de reversión, respecto de la propiedad inmobiliaria estatal;

XII. Celebrar acuerdos o convenios de concertación con las dependencias y entidades de la administración pública y con las personas físicas o morales de los sectores privado y social, para conjuntar recursos y esfuerzos para la eficaz realización de las acciones que en materia inmobiliaria están a su cargo; y

XIII. Solicitar al Congreso del Estado la desincorporación de los bienes inmuebles del dominio público.

ARTÍCULO 6 BIS.-Corresponde al Congreso del Estado:

- I. Vigilar y fiscalizar los bienes inmuebles del dominio del Estado, cuidando que no se afecte el patrimonio estatal o el interés colectivo;**
- II. Desincorporar mediante decreto los bienes inmuebles del dominio público;**
- III. Solicitar la información necesaria para autorizar, en su caso, la desincorporación del dominio público de los bienes inmuebles del Estado;**
- IV. Autorizar cualquier enajenación sobre los bienes inmuebles del dominio privado del Estado. La autorización deberá incluir el destino de los recursos que se obtengan por la enajenación. Deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión respectiva;**
- V. Fijar las condiciones a las que deben sujetarse las enajenaciones sobre los bienes inmuebles del dominio privado del Estado; y**
- VI. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones legales aplicables en la materia.**

ARTICULO 14.-...

II. Decretar, cuando así proceda, la incorporación al dominio público de un bien que forma parte del dominio privado, siempre que su posesión corresponda al Estado;

III. Solicitar al Congreso del Estado la desincorporación del dominio público, en los casos en que la Ley lo permita y asimismo mediante decreto, un bien que haya dejado de ser útil para fines de servicio público;

ARTICULO 16.- Los bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados o gravados, previo decreto de desincorporación del Congreso del Estado, cuando dejen de ser útiles para fines de servicio público.

El decreto que emita el Congreso del Estado deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión respectiva.

ARTÍCULO 39.- Son bienes de dominio privado del Estado:

IV. Aquéllos que siendo de propiedad estatal, por su naturaleza sean susceptibles de ser destinados a acciones habitacionales de interés social;

V. Los del dominio público que por decreto del Congreso sean desafectados; y

VI. Los demás bienes muebles e inmuebles que por cualquier título jurídico adquiera el Estado y que no están comprendidos en el artículo 19 de esta Ley.

ARTICULO 43. Los inmuebles de dominio privado que no sean adecuados para destinarlos a los fines a que se refiere el artículo anterior podrán, de acuerdo con los criterios que establezca el Gobernador del Estado, **y previa autorización del Congreso del Estado**, a través de la Comisión Estatal, ser objeto de los siguientes actos de administración y disposición:

....

ARTICULO 45.- La enajenación de inmuebles del dominio privado del Gobierno del Estado, de los organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal mayoritaria o de los fideicomisos públicos, con el fin de solucionar problemas de índole habitacional o urbano, se deberá realizar conforme a los programas de urbanización, notificación y fraccionamiento, los cuales deberán ser autorizados previamente por parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Las enajenaciones de inmuebles, que realicen las entidades de la administración pública estatal, que tengan por objeto o fin principal el fraccionamiento y comercialización de inmuebles, se sujetarán a lo dispuesto en sus leyes o decretos de creación, así como a las reglas que al efecto expida la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, mismas que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

En los casos de donación, el decreto correspondiente que emita el Congreso del Estado fijará el plazo máximo dentro del cual deberá iniciarse la utilización del bien inmueble en el objeto solicitado, en su defecto, se entenderá que el plazo es de dos años.

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización verificará el cumplimiento de los

plazos, fines y destinos a que esté sujeta la donación del bien inmueble, a efecto de recomendar al Ejecutivo del Estado, proceda a realizar las acciones tendientes a la reversión del inmueble, en los términos de la presente Ley.

ARTICULO 48.- Si el donatario no iniciare la utilización del bien en el fin señalado dentro del plazo previsto en el decreto emitido por el Congreso del Estado, o si habiéndole hecho, diere al inmueble un uso distinto, tanto el bien como sus mejoras revertirán en favor del Gobierno del Estado. Lo anterior será aplicable a los casos previstos en la fracción VII del artículo 43 de esta Ley, cuando el donatario sea una persona física.

También procederá la reversión del bien y sus mejoras en favor del Estado, respecto de las donaciones señaladas en la fracción V del artículo citado, cuando las asociaciones, sociedades o instituciones privadas desvirtúen la naturaleza de sus actividades o el carácter no lucrativo de sus fines, dejen de cumplir con su objeto o se extingan.

La reversión tendrá por efecto que el bien inmueble donado regrese de pleno derecho al patrimonio de Estado, con todas sus accesiones y edificaciones.

Las condiciones a que se refiere este artículo, se insertarán en la escritura respectiva y su incumplimiento dará origen a la rescisión del contrato.

ARTÍCULO 48 BIS.- El ejecutivo del Estado publicará la declaratoria de la reversión en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, deberá notificar al Congreso del Estado que se realizó la reversión, a efecto de que éste realice las anotaciones conducentes, y en su caso, le solicitará la abrogación del decreto correspondiente.

El Ejecutivo del Estado ordenará que, tanto en el Inventario General de los Bienes del dominio del Estado como en el Registro Público de la Propiedad, se realice la inscripción de la declaratoria de reversión.

ARTÍCULO 93 BIS.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización establecerá un programa de seguimiento de los actos jurídicos autorizados sobre los bienes inmuebles del dominio del Estado, como un mecanismo de apoyo a la función de fiscalización.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 330 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 330.- Para asegurar la transparencia en la captación, distribución y ejercicio de los recursos que se obtengan de la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado de Sonora se creará un Fondo para que los ingresos derivados de este rubro se aislen de la operación de los fondos regulares y se determinen las cuentas bancarias en las que se depositarán estos recursos, para mandatarlas y que remitan al Fondo los importes captados diariamente.

Los recursos recaudados se destinarán de la siguiente manera:

30% de los recursos recaudados serán transferidos a los Municipios en donde se encuentren los bienes inmuebles enajenados.

El 70% restante, será utilizado por el Estado de acuerdo a la autorización del Congreso.

Deberá expedirse Reglas de Operación para el manejo de este Fondo, y el mismo se incluirá un Comité que contribuya a la transparencia y el adecuado ejercicio de los recursos del Fondo.

Los Ayuntamientos deberán hacer público, mediante los medios a los que estén legalmente obligados, toda la información relacionada con el ejercicio de los recursos del Fondo, desde el acuerdo de sesión que corresponda, hasta la ejecución de los mismos. Por su parte, el Ejecutivo del Estado hará lo propio desde la página electrónica que se cree para la rendición de cuentas por parte del Fondo que se establezca para operar estos recursos.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo Estatal, tendrá un plazo de 30 días para la creación del Comité que maneje los recursos del Fondo y la expedición de las reglas de operación para el manejo del mismo Plazo para expedir reglas de operación

ATENTAMENTE
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA

DIP. GILDARDO REAL RAMÍREZ

DIP. JESÚS EDUARDO URBINA LUCERO

Hermosillo, Sonora, a 03 de octubre de 2019.

HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores en nuestro carácter de diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio del derecho de iniciativa consagrado en los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta Honorable Asamblea con el propósito de someter a su consideración, **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA**, con el objeto de contemplar la figura del maestro sombra, lo anterior, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La peor discapacidad es no darse cuenta de que todos somos iguales.

La tarea más difícil a la que uno se enfrenta como padre, es la educación de un hijo, pues en la vida nadie nos enseña a cómo ser los mejores ni los hijos vienen con manuales o instrucciones. Que podremos decir de aquellos padres que se enfrentan a la difícil situación de educar a un niño con alguna discapacidad.

En México, el artículo de 3º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la educación es un derecho que tiene que ser para todos de manera gratuita, laica y obligatoria y en el mismo tenor, la Ley General de Educación en su Artículo 2º, señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Sin embargo, en la realidad existe un sector de la población en edad escolar que no puede hacer uso de este derecho debido a que tienen una discapacidad; los principales factores que enfrenta esta población es la discriminación, la falta de infraestructura adaptada y la escasez de instituciones que les brinden atención.

La educación escolar tiene como finalidad fundamental promover de forma intencional el desarrollo de ciertas habilidades y conocimientos necesarios para que el alumno se pueda desarrollar en su entorno sociocultural. Para ellos, el alumno goza de herramientas y beneficios que lo ayudan a desarrollar su máximo potencial, sin embargo, esas fueron las políticas de la escuela tradicional, pero existen alumnos que aun así con esas herramientas, necesitan un apoyo extra por su condición ya sea física o intelectual.

Hace unos años con esta tesitura, se pensó que las escuelas de educación especial podrían llegar a mejorar la calidad de vida de los alumnos con discapacidad, concentrándose solamente en la rehabilitación y compensación de las dificultades derivadas de su condición, limitándoles aspectos básicos de la educación y sobre todo un aspecto que es vital en la vida de un individuo: la socialización, la integración plena a una sociedad.

Un diagnóstico sobre las causas de deserción escolar de alumnos, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, reveló que 23% de menores con discapacidad entre 5 y 9 años no van a la escuela, 26% de los de 10 a 14 años y 52% de los que tienen entre 15 y 19.

A pesar de que el estudio tiene más de una década de realizado, ahora en día vemos que la calidad educativa de las personas con discapacidad no ha mejorado; sus desventajas persisten y lo único que ha aumentado, es su población pues hoy en día el sistema educativo en Sonora cuenta con 32,778 alumnos en educación especial divididos de la siguiente manera:

- 23,092 en el sistema federalizado

- 9,591 en el sistema estatal y,
- 95 en el sistema particular

La política segregacionista y separatista que se aplicó y se aplica hoy en día no ha dado resultados. Los fines para los cuales fueron creadas las escuelas especiales, de segregar a la población en guetos por el simple hecho de haber nacido con un gen más o un trastorno de desarrollo psicológico social es limitar el desarrollo social de una persona.

No podemos seguir en esta política segregacionista, requerimos de la apertura necesaria para generar una cultura de tolerancia, aceptación de la diversidad, de manera que todos, sin restricción alguna, tengamos acceso a ellos, todos somos iguales.

Para México un parteaguas en la política de inclusión fue en 1990 en la Conferencia Internacional sobre “Educación para Todos” en donde se concluyó que “...la escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades para todos, respetando la diversidad y atendiendo a las necesidades de cada uno de forma diferencial, además de un espacio de integración social, donde se conoce, comparte y convive con personas provenientes de otros grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar a todos por igual.

Un niño con una discapacidad, al entrar a una escuela regular es normal que se encuentre en desventaja por el hecho de ser diferente. Sí, le va costar un tiempo adaptarse a las tareas del grupo, algunas veces se sentirá rechazado y otras subestimado, habrá momentos en que la propia familia se preguntará si vale la pena los rechazos de sus compañeros, los reclamos de la maestra porque el niño no aprende y las críticas de los padres de familia de sus compañeros porque atrasa al grupo.

Por todo esto, es que hoy vengo a esta Tribuna a proponer la figura de un maestro sombra para todo el sistema escolar en nuestro estado: un asistente educativo con la capacitación adecuada, dedicado a la atención de personas con discapacidad y necesidades educativas especiales, teniendo como fin integrarla a un entorno más accesible y acorde a sus capacidades, en aquellos grupos donde se cuente con al menos una persona con discapacidad,

ayudándole a reconocer las rutinas escolares dentro del salón, conductas afuera del salón y cómo responder acertadamente a eso.

Así, coadyuvamos en la generación de un clima de comunicación y orientación con el docente de grupo, compartiendo el conocimiento actualizado del niño con discapacidad y de los posibles abordajes terapéuticos de modificación de conducta y apoyar al docente de grupo y a los compañeros del salón de clase para que conozcan de qué manera pueden dirigirse al niño con discapacidad.

Se pudiera comentar que este proyecto podría ser inviable o costoso por el hecho de decir que se contempla la contratación de mayor personal bajo el concepto de maestro sombra, pero aquí se contempla que toda persona con la capacitación y formación adecuada por la Secretaría de Educación, pudiendo llegar a fungir como maestro sombra un familiar del niño con discapacidad, una persona cercana, sin que esto genere necesariamente un gasto extra al Estado por ello.

Son familias que dan todo por sus hijos y que por el hecho de ver mejorar a su hijo, volverían a estudiar, solamente les hace falta las herramientas.

Compañeros diputados, los invito analizar y reflexionar esta iniciativa, pensemos como legisladores, pero sobre todo como padres de familia, todos conocemos o vivimos una situación de este tipo, actuemos en consecuencia, por el bien de las familias que viven esta pesada situación, que esas familias sepan que nos importan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente Iniciativa con carácter de

DECRETO

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XIII al artículo 2º, un párrafo quinto al artículo 37 y el artículo 37 BIS, todos de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:

Artículo 2º.- . . .

I a XII.- . . .

XIII.- Maestro Sombra: es un asistente educativo que con la capacitación adecuada se dedica a la atención de personas con discapacidad y necesidades educativas especiales, teniendo como fin integrarla a un entorno educativo más accesible y acorde a sus capacidades.

Artículo 37.- . . .

. . .

. . .

. . .

Las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales en libre desarrollo e integridad de su persona, tendrán el derecho de contar con un maestro sombra en cualquier momento de su educación cuando así lo necesiten, proporcionado por la Secretaría y tendrá las siguientes funciones:

- I. Ayudar a reconocer las rutinas escolares dentro del salón, conductas afuera del salón y cómo responder acertadamente a eso;
- II. Apoyar al docente de grupo y a los compañeros del salón de clase para que conozcan de qué manera pueden dirigirse al niño con discapacidad y en qué áreas apoyarlo más.
- III. Crear un clima de comunicación y orientación con el docente de grupo, compartiendo el conocimiento actualizado del niño con discapacidad y de los posibles abordajes terapéuticos de modificación de conducta, de tal manera, que el docente de grupo conozca más al niño y pueda manejarlo, dirigirlo y apoyarlo cuando así lo requiera.
- IV. Estructurarle al niño las actividades escolares, elaborando una rutina visual de los periodos de trabajo y los materiales que se usarán en ellos, según requiera por la gravedad de la discapacidad.
- V. La orientación de la adecuación curricular, que consiste en sugerir las modificaciones pertinentes al programa escolar del docente, cuando así lo requiera, para que el niño pueda acceder a tales conocimientos requeridos a la etapa de educación básica desde sus características particulares.
- VI. Apoyar al niño o niña a notar los estados afectivos en sí mismo y en los demás.

- VII. Apoyar al docente de grupo y a los compañeros del salón de clase para que conozcan de qué manera pueden dirigirse al niño con discapacidad y en qué áreas apoyarlo más.

Artículo 37 BIS.- Para desempeñarse como maestro sombra se deberá contar preferentemente con estudios en alguna de estas ramas u otras afines: pedagogía, psicología infantil, maestra en educación especial o psicopedagogía.

La Secretaría de Educación y Cultura capacitará permanentemente y validará a las Asociaciones Civiles u organizaciones que presten los servicios de maestro sombra, integrando un padrón anual de las Asociaciones Civiles u organizaciones que presten los servicios de maestro sombra.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

ATENTAMENTE

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. FERMÍN TRUJILLO FUENTES

DIP. FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES

HONORABLE ASAMBLEA:

El suscrito Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de ésta Sexagésima Segunda Legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, propuesta con Punto de Acuerdo para el efecto de que esta Legislatura Estatal, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente ante el Honorable Congreso de la Unión, **INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL**, conforme la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA

Diversos ciudadanos y ciudadanas adultos mayores se han acercado a mi casa de enlace en Guaymas, solicitando que eleve una reforma de ley al Congreso de la Unión, para que puedan gozar de los beneficios que se establecen en la Ley del Seguro Social, después de haber sido dados de baja como asegurados. De igual manera, por diversos medios me lo ha solicitado, el líder social de Guaymas, Francisco Villaflor presidente de la asociación civil unión y fuerza guaymense.

Lo anterior derivado de que para acceder a solicitar las diversas pensiones de: Invalidez, Cesantía en edad avanzada, Vejez, Viudez, orfandad o ascendencias que no derive de un accidente de trabajo, las y los trabajadores deben conservar sus derechos.

Actualmente, la Ley del Seguro Social establece en los artículos 150 y 151 lo siguiente:

“Artículo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses.

Artículo 151. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, en la forma siguiente:

I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de tres años, se le reconocerán, al momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones;

II. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas cotizaciones;

III. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento, y

IV. En los casos de pensionados por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán en todos los seguros, con excepción del de invalidez y vida. En los casos de las fracciones II y III, si el reingreso del asegurado ocurriera antes de expirar el período de conservación de derechos establecido en el artículo anterior, se le reconocerán de inmediato todas sus cotizaciones anteriores.”

“Ejemplo: Si una trabajadora o trabajador cotizó al Instituto Mexicano del Seguro Social 1,000 semanas, estas se dividen entre cuatro, lo que arroja la cantidad de 250 semanas, es decir, conservarán el derecho para solicitar cualquiera de las citadas pensiones durante las 250 semanas posteriores a la fecha de su baja, a mayor abundamiento, tienen una conservación de derechos de 4 años 42 semanas, lo que resulta de dividir 250 semanas entre 52 semanas (que corresponden a un año calendario).”⁶

Es decir que, si no cumplen con requisitos que la ley del Seguro Social, establece para acceder a las pensiones estas se les niega. Lo que deja en estado de indefensión a gente con enfermedades y en edad avanzada, que necesita lo poco que se da de dinero para subsistir.

En este sentido, yo no me puedo hacer omiso ante esta solicitud y traigo el tema a esta cámara para su discusión y análisis. El argumento en el pasado era que no había dinero para ello, pero entonces ¿qué se hizo con el dinero aportado por los y las trabajadoras que hoy reclaman sus derechos? Me parece muy injusto lo que les esta pasando a la gente en estos casos.

En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por los artículos 52 y 53 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto al análisis de esta Asamblea, el siguiente punto de:

A C U E R D O

ÚNICO. - El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo artículo 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de Sonora, resuelve presentar ante el H. Congreso de la Unión, Proyecto de **DECRETO** que reforma y deroga diversas disposiciones de la **LEY DEL SEGURO SOCIAL**:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 150 y se deroga el artículo 151 de la **LEY DEL SEGURO SOCIAL**, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida.

Artículo 151.- Derogado

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A T E N T A M E N T E

Hermosillo, Sonora a la fecha de su presentación.

Diputado Rodolfo Lizárraga Arellano
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

COMISIONES DE DESARROLLO URBANO Y DE ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, UNIDAS.

DIPUTADOS INTEGRANTES:

**GRICELDA LORENA SOTO ALMADA
MARTÍN MATRECITOS FLORES
CARLOS NAVARRETE AGUIRRE
JORGE VILLAESCUSA AGUAYO
FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES
LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
MIGUEL ÁNGEL CHAIRA ORTÍZ
NORBERTO ORTEGA TORRES
ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH
YUMIKO YERANIA PALOMAREZ HERRERA**

HONORABLE ASAMBLEA:

A los suscritos, diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático de ésta Sexagésima Segunda Legislatura, en forma unida, nos fue turnado para estudio y dictamen por la Presidencia de éste Poder Legislativo, escrito presentado por el diputado Luis Mario Rivera Aguilar, representante parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el cual contiene **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA**, con el propósito de contemplar la creación de pasos de fauna en las carreteras estatales.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, fracción XXX, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

El diputado Luis Mario Rivera Aguilar presentó su iniciativa en la sesión de Pleno celebrada el 12 de febrero de 2019, misma que se sustenta conforme a los siguientes argumentos:

“En México, en términos de la Ley General de Vida Silvestre, se denominan vida silvestre los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que entran bajo el control del hombre, así como los animales ferales.

En nuestro país y a escala internacional, en la lucha por la conservación de la vida silvestre, la protección representa un elemento indispensable debido al alto grado de explotación de las diversas especies y el desequilibrio ecológico que representa su extracción del medio natural. Lo que genera alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos

Es por ello, que la fauna silvestre es un elemento fundamental para el sustento de los ecosistemas y su equilibrio ecológico, además de proveer de servicios ambientales indispensables para el bienestar humano, y se les conoce como servicios ambientales de mantenimiento. Es decir la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.

Algunos de estos servicios de mantenimiento, son la producción de aire limpio, la regulación atmosférica, climática e hidrológica, la conservación del ciclo de nutrientes, el control de plagas, la fotosíntesis, la polinización y la formación y el mantenimiento de los suelos.

Cada uno de estos servicios resulta invaluable por la utilidad que tienen para el bienestar humano; sin embargo, todos ellos están ligados al buen funcionamiento de las asociaciones vegetales en las que son indispensables los animales.

Los ecosistemas trabajan con una delicada estructura formada por la vegetación y los animales, ambos grupos dependen unos de otros para mantener a los ecosistemas funcionales y sanos.

Sonora es el segundo Estado más grande de la República, después del Estado de Chihuahua, - que por cierto acaba de aprobar la creación de pasos de fauna en su legislación -, nuestro Estado posee una enorme diversidad cultural, así como una extensa variedad de ecosistemas de flora y fauna.

Los ecosistemas de Sonora forman un continuo de variación ecológica desde la costa árida del alto Golfo de California hasta las montañas frías y húmedas en lo alto de la Sierra Madre Occidental. Incluyen una multitud de tipos de vegetación, cuya alta diversidad está relacionada con la gran variabilidad climática y topográfica de la región; desde los manglares, el matorral costero y el Desierto Sonorense, con cuatro de sus siete

subdivisiones; al bosque tropical caducifolio, los pastizales, los encinares y los bosques de pino-encino y mixtos de coníferas en las áreas de mayor elevación.

Es impresionante la cantidad de ecosistemas que hay en nuestro Estado. Pero nuestro modelo de desarrollo requiere del uso de caminos locales y federales para poder acercar los distintos puntos de nuestra extensa región.

Los alcances de la infraestructura carretera nacional son, hoy en día, un importante símbolo de unidad y muestra de progreso. Los beneficios que conlleva la inversión en infraestructura son evidentes en el plano económico: mejor movilidad, mayores capacidades logísticas, mejor acceso a servicios educativos, recreativos y de salud e incluso mayor facilidad para la captación de inversión directa.

La inconveniencia está en que los caminos que nos acercan atraviesan arbitrariamente los ecosistemas, generando un daño irreparable a la naturaleza. Pero nadie puede negar los efectos positivos que tiene sobre la economía la expansión de las capacidades de interconexión entre diversas ciudades.

Los caminos, carreteras o puentes crean una división tangible entre dos segmentos de un mismo hábitat. Este fenómeno nos es particularmente notable en las zonas urbanas del país, pues una primera urbanización transformó de forma completa los ecosistemas que previamente ocupaban estos puntos. El resto del entorno, sin embargo, conserva amplios territorios donde estos caminos fragmentan su composición, reduciendo el espacio vital de miles de especies de flora y fauna e impactando negativamente el desarrollo de éstas.

Sin embargo un fenómeno menos discutido, lamentablemente, es el impacto medioambiental que va de la mano a esta expansión, así como las consecuencias catastróficas que conlleva la fragmentación de los diversos hábitats con los que cuenta el país.

Datos de la asociación Wildlands Network, una organización estadounidense que tiene la visión de protección de la naturaleza salvaje a escala continental, mediante una red de vida silvestre, por traducirlo de alguna manera, señalan que más de 2 mil vertebrados mueren atropellados al año, tan solo en un tramo de 243 km de la Carretera Federal No. 2, que conecta las comunidades de Imuris-Cananea y Agua Prieta, al norte del estado. El número total de animales que muere en las carreteras del Estado de Sonora al tratar de cruzarlas, no se conoce ya que no existen estudios detallados y públicos para otras vías.

Por lo expuesto, es que consideramos que se requiere con urgencia la habilitación y/o construcción de “pasos de fauna” en todas las regiones del Estado en donde habitan especies en peligro de extinción, acompañados de señalamientos preventivos, sobre todo en corredores biológicos identificados por especialistas, como el corredor Sierra Azul - El pinito y Sierra Peloncillo, zonas de importancia para el movimiento de fauna entre los Estados Unidos y México, entre muchos otros.

En efecto, resulta de suma importancia y urgencia lo señalado, toda vez que además, la falta de protección por los pasos de vida silvestre, también pone en peligro a los conductores que

transitan por esas carreteras, quienes están expuestos a accidentes causados por las colisiones con fauna.

El tema de la construcción de "pasos de fauna" para estos animales silvestres, es un tema que ha sido tratado por organizaciones de la sociedad civil dedicada a la conservación de especies con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero actualmente nos siguen sorprendiendo incidentes en esta materia.

Para reducir atropellamientos de fauna silvestre y principalmente evitar accidentes carreteros que pongan en peligro nuestra integridad, es mi punto de Acuerdo la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, para que se construyan pasos de fauna en las carreteras del Estado.

En ese contexto, tenemos la responsabilidad legislativa depositada por nuestros representados de atender todo tipo de situaciones y encontrarles la solución; como en este caso las de la protección de la fauna y seguridad de los automovilistas. Por esto, sin duda, es necesario implementar en el ámbito legislativo todas las medidas necesarias para proteger a la vida silvestre en las carreteras de Sonora, construyendo pasos de fauna y acompañados de señalamientos de precaución extrema por cruce de fauna, mismos que redundarán en la seguridad e integridad de los conductores en nuestro Estado."

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la iniciativa en estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los

demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que en la interpretación, reforma o abrogación de leyes, deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

TERCERA.- El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora.

CUARTA.- La palabra “fauna”, proviene del latín “*Fauna*” (diosa de la fecundidad) y se denomina así al **conjunto de animales** de una **región geográfica**, mientras que por “hábitat” se entiende al lugar que presenta las **condiciones apropiadas** para que viva un **organismo, especie o comunidad animal o vegetal**. Se trata, por lo tanto, del espacio en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure perpetuar su presencia en el planeta. Entonces, los cambios en el **hábitat** pueden poner en riesgo la supervivencia de la fauna que ahí habita. En los casos más drásticos, incluso, dichos cambios pueden llevar a la **extinción** de una o varias especies.

El Dr. Oscar Gustavo Retana-Guiascón, autor de la obra: “*Fauna Silvestre de México. Aspectos históricos de su gestión y conservación*”, define la gestión de la vida silvestre como el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad de las poblaciones de fauna y flora silvestre y sus hábitats, a través de información y participación coordinadas entre los diferentes usuarios del recurso, a fin de garantizar el mantenimiento y la continuidad de sus bienes, servicios y oportunidades ecológicas, sociales y económicas a largo plazo y, con ello, lograr una transición hacia su utilización sostenible y su conservación.

En materia de reglamentación sobre fauna silvestre, es importante resaltar que, los primeros convenios internacionales para la protección de aves migratorias y mamíferos cinegéticos entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, fueron celebrados en los años treinta y no fue, sino hasta el año de 1940, cuando fue promulgada la primera Ley de Caza, siendo hasta los años setentas que se dio el surgimiento y la operación de numerosos programas nacionales y regionales, a raíz de la celebración de nuevos acuerdos internacionales, tal como el Acuerdo de Cooperación para la Conservación de la Vida Silvestre, celebrado entre México y EE. UU, y no es sino hasta los años noventa que se da la adhesión de México a la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, brindando con ello un valioso soporte para la protección de la fauna en el tráfico ilegal internacional de ésta. Derivado de la cumbre de Río, México firma el Convenio sobre Diversidad Biológica, primer acuerdo mundial sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y se crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), que es la consolidación institucional de los esfuerzos nacionales para sistematizar el conocimiento del capital natural mexicano.

Los compromisos internacionales de México habrían de conducir al desarrollo de nuevas estrategias de conservación *in situ*, como las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, única figura legal para su aprovechamiento establecida en la Ley General de Vida Silvestre, promulgada en el año 2000 que, por primera vez, reconoce el derecho de los dueños y poseedores de tierras a obtener beneficios de su uso, siempre y cuando garantice su conservación.

En ese sentido, la Ley General de Vida Silvestre, establece la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de dicho ordenamiento federal.

Ahora bien, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, dispone en su artículo 1, que el objeto de la misma es regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, organizar el sistema de los centros de población en la Entidad y asegurar la dotación suficiente de infraestructura y equipamiento, así como la coordinación de acciones entre el Estado y los ayuntamientos en materia de planeación, administración y operación del desarrollo urbano.

Asimismo, el artículo 2 de dicha Ley dispone que la finalidad de la misma es mejorar la calidad de vida de la población, para esto, la Ley prevé diversas disposiciones que tienen como fin, entre otros, garantizar el desarrollo urbano sustentable en donde se distribuya de manera equitativa los beneficios y cargas del proceso de urbanización y se protejan los recursos naturales.

Por otra parte, el artículo 17 de la ley referida en los párrafos que anteceden, define a la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial como aquella que configurará la dimensión territorial del desarrollo del Estado, en el mediano y largo plazo, estableciendo el marco básico de referencia y congruencia con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales y regionales del país y en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, y promoverá la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado del Estado, la cual deberá, entre otras cosas, incluir los programas regionales de ordenamiento territorial, que serán la expresión territorial de la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial.

Así, tenemos que el planteamiento del diputado que inicia, consiste en lo siguiente:

1.- En primera instancia, se propone adicionar la fracción XXXII BIS al artículo 2 de la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con el fin de incluir los “pasos de fauna” en el catálogo de definiciones de dicha norma, para

dejar claramente establecido el significado de dicho concepto y evitar con esto, interpretaciones a discreción sobre el mismo.

2.- Por otra parte, se adiciona un inciso d) a la fracción IV del artículo 18 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con el objeto de establecer en dicha disposición, la proyección y construcción de pasos de fauna sobre carreteras de la región, dentro de los programas regionales de ordenamiento territorial antes citados.

Como podemos apreciar, la propuesta en estudio atiende una problemática muy común en nuestras carreteras, al establecer nuevas disposiciones en beneficio directo y protección de nuestra fauna silvestre, con lo que, adicionalmente, disminuiría en gran medida la probabilidad de accidentes que ocasionan la pérdida de estas especies, así como cuantiosos daños materiales, pero que también, en múltiples ocasiones son motivo de la pérdida de vidas humanas; razón por la cual, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideramos viable el proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que es materia del presente dictamen.

Finalmente, es pertinente señalar que, atendiendo lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el artículo 79, fracción IX de la Constitución Política del Estado de Sonora, mediante oficio número 2448-I/19, de fecha 04 de abril de 2019, la Presidencia de este Poder Legislativo tuvo a bien solicitar al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, la remisión a esta Soberanía, del dictamen de impacto presupuestario de la iniciativa en cuestión. Al efecto, mediante oficio número SH-0653/2019, de fecha 24 de abril de 2019, el titular de la Secretaría de Hacienda señala lo siguiente al respecto: “...en virtud de lo anterior, le informo que esta Secretaría de Hacienda no estima que las siguientes iniciativas contengan impacto presupuestal que ponga en riesgo el Balance Presupuestario Sostenible del Gobierno del Estado: FOLIO 587, Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a

la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con el propósito de contemplar la creación de pasos de fauna en las carreteras estatales.”

En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXXII BIS al artículo 2 y el inciso d) a la fracción IV del artículo 18, todos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

Artículo 2.- ...

I a la XXXII.- ...

XXXII BIS.- Pasos de Fauna: estructuras transversales a una vía con el objetivo de habilitar el paso seguro de fauna a los hábitats fragmentados por la construcción de infraestructura de transporte. Su funcionamiento puede estar restringido al desplazamiento de fauna o pueden compartir uso para otros propósitos como: drenaje, restitución de caminos, vías fluviales y vías pecuarias. Este tipo de pasos pueden ser superiores o inferiores a la vía;

XXXIII a la XLVI.- ...

Artículo 18.- ...

I a la III.- ...

IV.- ...

a) al c).- ...

d).- La elaboración de proyectos y construcción de pasos de fauna sobre carreteras que integran la región;

V.- a la VI.-...

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

**SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917"
Hermosillo, Sonora, a 01 de octubre de 2019.**

C. DIP. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA

C. DIP. MARTÍN MATRECITOS FLORES

C. DIP. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE

C. DIP. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO

C. DIP. FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES

C. DIP. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR

C. DIP. MIGUEL ÁNGEL CHAIRA ORTÍZ

C. DIP. NORBERTO ORTEGA TORRES

C. DIP. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH

C. DIP. YUMIKO YERANIA PALOMAREZ HERRERA

NOTA DEL EDITOR: Las iniciativas y posicionamientos de los diputados se publican en los precisos términos en los que son enviados por quienes los suscriben.